



Parlament de les Illes Balears

**Treballs de la Comissió Assessora. Acords relatius als Títols I, III, IV i V. Sessions
34 a 38**



Govern de les Illes Balears

Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

VICEPRES I REL INST

REGISTRE: SORTIDES

Núm: 568/2006

Data: 06/02/2006

Hble. Sr. President del Parlament de les Illes Balears

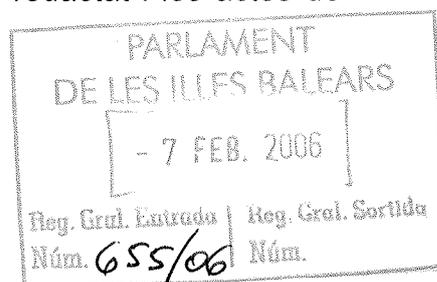
Per Acord del Consell de Govern de data 01/10/2004 es va constituir la Comissió Assessoradora per a la Reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, a l'objecte de proposar les aportacions de persones expertes en el seu contingut de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

Des de la seva constitució la Comissió s'ha anat reunint i ha pres els acords relatius als Títols I,III,IV i V que a continuació es relacionen.

S'adjunten les ponències que els vocals assignats han redactat i les actes de les sessions celebrades.

Ponències:

1. Sra. Maria Pilar Ferrer Vanrell (Doc. Núm. 1)
2. Sra. Maria Pilar Ferre Vanrell (Doc. Núm. 2)
3. Sr. José Antonio Roselló Rausell (Doc. Núm 3).
4. Sr. José Antonio Roselló Rausell (Doc. Núm. 4)
5. Sra. Felisa Vidal Mercadal (Doc. Núm. 5)
6. Informe dels acadèmics D. Raimundo Clar Garau i D. Miquel Masot Miquel (Doc. Núm 6)



Vots particulars:

Sr. Ignasi Ribas Garau (Doc. núm.7).

Actes:

1. Sessió número 34 (Doc. núm.8).
2. Sessió número 35 (Doc. núm.9).
3. Sessió número 36 (Doc. núm.10).
4. Sessió número 37 (Doc. núm.11).
5. Sessió número 38 (Doc. núm.12).

Palma, 6 de Febrero del 2006

La Presidenta

M. Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta sobre modificación de los artículos 10.23 y 50 en el marco de la relectura de los acuerdos adoptados por la Comisión asesora

Palma, 15 de noviembre de 2005

La redacción que se acordó, de la que no era partidaria porque debido a su oscurantismo fue motivo de varios recursos de inconstitucionalidad entre los años 1992-93, hoy, creo que superado, me lleva a presentar una propuesta de redacción acorde con los términos de la Constitución.

El primer párrafo corresponde al art. 149.1.8 y el segundo párrafo al artículo 149.1.6, ambos de la Constitución Española.

Propuesta de redacción del art.10.23

23. Derecho civil y la determinación del sistema de fuentes, excepto las reglas relativas a la aplicación y a la eficacia de las normas jurídicas, las relaciones juridico-civiles relativas a las formas del matrimonio, la ordenación de los registros y los instrumentos públicos, las bases de las obligaciones contractuales, las normas para resolver los conflictos de leyes y la determinación de las fuentes del derecho estatal.

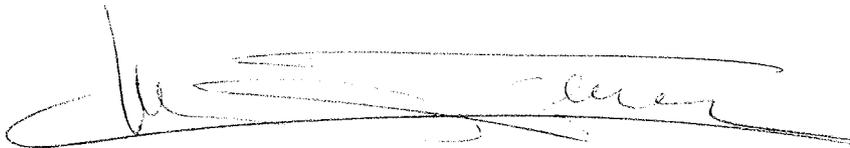
También es de competencia de la CA dictar las normas procesales que deriven de las particularidades del derecho sustantivo de la la CA.

Propuesta al artículo 50:

Suprimir el párrafo segundo del artículo 50, porque ya se incluye en el 10.23.

Modificar el párrafo tercero, añadiendo al final: “En matèria de dret civil propi, l’aplicació supletoria del dret estatal queda condicionada a la no oposició als principis del seu Ordenament jurídic”.

María Pilar Ferrer Vanrell



10.23. *Conservació, modificació i desenvolupament del dret civil de la Comunitat Autònoma.*

10.23 Cinc membres de la Comissió proposen la següent redacció:

- “ Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva en matèria de dret civil, inclosa la determinació del seu sistema de fonts, llevat de les regles relatives a l'aplicació i a l'eficàcia de les normes jurídiques, les relacions jurídicocivils relatives a les formes de matrimoni, l'ordenació dels registres i instruments públics, les bases de les obligacions contractuals, les normes per resoldre els conflictes de lleis i la determinació de les fonts del dret de competència estatal”.
- Quatre membres són partidaris de mantenir la redacció vigent.

Article 50

1. En matèries de competència exclusiva de la comunitat autònoma, el dret propi de les Illes Balears és aplicable dins el seu territori preferentment a qualsevol altre, segons els termes prevists en aquest Estatut.
2. En la determinació de les fonts del dret civil de les Illes Balears es respectaran les normes que s'hi estableixen.
3. En tot allò que no estigui regulat pel dret propi de les Illes Balears, hi serà d'aplicació supletoria el dret de l'Estat.

Pilar Ferrer

Propuesta de modificación del artículo 56:

Suprimir: els corredors de comerç.

Añadir a los vigente términos: “així com a les oficines recudadores “

“1. La comunitat autònoma participará en la fijación de las demarcaciones judiciales i en les corresponents a les notaries i als registres de la propietat i mercantils així com de les oficinas liquidadoras con cargo a los Registradores de la Propiedad, mercantiles y de Bienes Muebles, radicats en el seu territori”

La petición de modificación me ha llegado a través un Registrador de la Propiedad, argumentando que el texto del Proyecto de Estatuto de Valencia les parecía de importancia para que el balear también lo contemplara.

Párrafo del Texto del Proyecto de Estatuto de Valencia del que se ha tomado ejemplo.

Artículo 64?

El Consell participará también en la fijación d demarcaciones correspondientes a los registros de la propiedad y mercantiles, demarcaciones notariales y número de notarios de acuerdo con l que prevén las leyes del Estado, así como de las oficinas liquidadoras con cargo a los Registradores de la Propiedad, mercantiles y de Bienes Muebles

Palma 19 de noviembre de 2005
María Pilar Ferrer Vanrell



Posibles enfoques sobre la reforma del Sistema de Financiación Autonómica en el contexto de la Reforma del Estatuto de Autonomía

José Antonio Roselló Rausell (Director General de Proyectos y Coordinación Departamental. Miembro de la Comisión)

Sesión de la Comisión de la Reforma del Estatuto de Autonomía. Documento de trabajo. 14-12-2005

Básicamente, se pueden establecer cuatro enfoques alternativos, sin perjuicio de los vasos comunicantes entre ellos:

Primera Opción.- Adaptar el Estatuto de Autonomía a la actual LOFCA. Esta última fue modificada con motivo de los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio y diciembre de 2001. Como consecuencia de ello, los preceptos del actual Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, referidos a la Hacienda de la Comunidad Autónoma, han quedado técnicamente desfasados u obsoletos en diversos puntos. Si se mira en detalle, este sería, desde cierto punto de vista, el enfoque seguido en la reforma valenciana, al margen de algunas cuestiones de redacción ambigua¹. Esta ambigüedad permite también contextualizar la propuesta valenciana en el marco del siguiente punto.

Segunda Opción.- Elaborar lo que podríamos denominar bajo la expresión “sistema actual reforzado”, que consistiría en los siguientes aspectos: En primer lugar, seguir dependiendo del concepto técnico de “necesidad de gasto” estableciendo un sistema de financiación que haga depender con valentía la financiación del año base del impacto “verdadero” de unas variables socioeconómicas relevantes para la Comunidad Autónoma (y para el conjunto de todas las Comunidades Autónomas). Es decir, aceptar el resultado objetivo que resulte del entramado del modelo estadístico- matemático, lo cual supone además descartar el impacto de intervenciones “ad hoc” como las reglas de modulación. En el caso de las Illes Balears este enfoque supondría descartar la existencia de un flujo negativo.

¹ Obsérvese que en el nuevo texto valenciano se sigue centrandó la cuestión del Sistema de Financiación Autonómica en el concepto de “necesidad de gasto”, frente a lo que sería la opción de la propuesta catalana que aborda la cuestión desde la óptica del ingreso.

Actuar de esta manera supondría recuperar el enfoque (non nato) del Libro Blanco de Financiación (en lo que se refiere a la determinación correcta de la necesidad de gasto), tomando como referencia conceptos básicos como la población o los usuarios, corregidos por aspectos particulares muy concretos de diferencias de coste, como es el caso de la insularidad.

Por otra parte, la necesidad de gasto no quedaría fijada para siempre, sino que se iría actualizando de acuerdo con el devenir de la realidad económica y social, a fin de poder adaptarse a la evolución demográfica y sociológica, permitiendo actualizar, por tanto, dentro del sistema de financiación, cuestiones tales como la necesidad de atender una mayor demanda educativa o también el creciente y cada vez más relevante problema de la dependencia.

Además, una variante del sistema podría ser la disociación del subsistema sanitario, mediante el establecimiento más regular de garantías de financiación (la actual garantía basada en el PIB nominal sólo dura tres años), precedida de una revisión de la actual configuración básica del sistema en este punto.

Se podría incluso establecer un periodo de transición conducente hacia una situación en la que la financiación balear por habitante se sitúe en la media de las Comunidades Autónomas. Este periodo de transición, en esencia tendría unas características parecidas a las que Solchaga estableció en el sistema 1992-1997 (en aquel momento, la entrada en acción del nuevo sistema se produjo sucesivamente por tercios)

Establecida satisfactoriamente la financiación en el año base, entonces se podría pensar (acto seguido, no ex ante) en la cesión de porcentajes determinados de figuras tributarias, que mejoren la situación actual y ejerzan a medio plazo la función de lubricar el sistema a través de los llamados “flecós”².

Este enfoque se acompañaría de correlativas cesiones de impuestos que aumentasen la corresponsabilidad fiscal, retomando así la vía iniciada en el sistema 1997-2001 y

² Debe observarse que al realizar esta propuesta se está diciendo implícitamente que el mayor problema del Sistema de Financiación Autónoma no es la corresponsabilidad fiscal, no es el ingreso, sino por el contrario la deficiente especificación de la financiación en el año base (la F matemática), agravada por la inadaptación inesperada a la evolución de la sociedad. Deficiencia que el sistema de flecos por la vía de la

profundizada en los acuerdos de julio de 2001, que en buena medida serían aprovechables, con la única diferencia (trascendental) de identificar más apropiadamente la “necesidad de gasto”.

Es obvio que con este enfoque no se produce una descalificación global del sistema vigente.

Tercera Opción.- La del tripartito catalán. El problema de esta opción es que parece haberse centrado en lo accesorio, negativo y poco realista, obviando otros elementos positivos (y más trascendentales) que ciertamente también existen. Básicamente, el problema es que con esta propuesta catalana se está adoptando, no un enfoque federal, sino confederal y, en concordancia con ello, se dinamita el sistema fiscal español. Por otra parte, conlleva un coste inasumible para el Estado, más si cabe si esta propuesta tuviese que ser efectivamente aplicada a las Comunidades Autónomas de Baleares y de Madrid.

Cuarta Opción.- Sería una propuesta que participaría de elementos de las señaladas en los números dos y tres anteriores, cuyo engarce o unión sería el llamado “gradualismo” o establecimiento de un periodo de transición. Es decir, el punto de llegada sería un diseño del sistema de financiación consistente ante todo en una revisión de la propuesta catalana más acorde con los sistemas federales de referencia (como es el caso del Canadá o de Alemania), no necesariamente copiando éstos, pero sí en cambio tendente al cumplimiento de lo que se conoce como el “principio de ordinalidad”, es decir el respeto de la posición relativa de una Comunidad Autónoma partiendo de la base de su capacidad de financiación. Una variante de este principio, que actualmente también se está difundiendo, es la de respetar asimismo el orden en la posición de renta por habitante, de modo que las distorsiones del sistema redistributivo no sean tan extremadas como en la actualidad.

Lo anterior significa que se podría y debería dar un paso más en los resultados de financiación por habitante y no quedarse conformes solamente con alcanzar la media.³

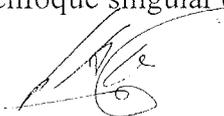
De este modo, las Comunidades Autónomas de mayor capacidad fiscal de entrada, o por encima de la media, rebajarían su baremo relativo, pero no verían alterado su orden. Al mismo tiempo, las de menor capacidad fiscal, recibirían una transferencia niveladora que las acercaría a la media.

Comoquiera que adoptar este sistema desde un principio conlleva un alto coste para el Estado, dadas las posiciones de partida (y partiendo de la base de que en términos absolutos nadie pierda financiación en el momento inicial) se hace preciso pensar en la concreción de este sistema en el medio plazo.

Para ello, es necesario establecer un periodo de transición cuyo punto de partida sería el establecimiento de lo que antes llamamos un “sistema actual reforzado” (que a su vez, como también se ha indicado, requeriría de su propio periodo interno de transición) sustentado en las notas que se han señalado en la opción segunda.

En este supuesto, la capacidad normativa sobre los impuestos sería un asunto colateral y no esencial ni distorsionador de la propuesta.

Esta opción no descarta, sino todo lo contrario, seguir trabajando en la aplicación de las previsiones de la Ley 21/2001 para los años pasados (2002 y ss.) e incluso establecer un enfoque singular en la cuestión de la financiación sanitaria.



³ En cualquier caso, alcanzar la media de financiación ya sería un hito, pues hoy la Comunidad Autónoma de las Illes Balears se encuentra 15 puntos por debajo.

Propuesta sobre Relectura de Competencias
(Documento de trabajo)
**Comisión Asesora para la Reforma del Estatuto de Autonomía
de les Illes Balears**

**-Dirección General de Proyectos y Coordinación Departamental-
16-11-05**

Antecedentes:

- En primer lugar, recordar que la comisión ha seguido la técnica de suprimir todas las “coletillas” que en los artículos 10, 11 y 12 se refieren al Estado, por entender que “van de suyo” y que de persistir dan la imagen de un Estatuto innecesariamente tutelado.
- Lo anterior, siendo correcto, no nos debe hacer perder la perspectiva de que muchas materias, aun estando en el artículo 10, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional se ven incididas por la legislación básica del Estado y por consiguiente ven destruida la nota de exclusividad en el sentido estricto y pleno y, también por ello, no se les puede aplicar el artículo 50.1 del Estatuto actual, que por otro lado no ha sido objeto de variación en la comisión de expertos.
- En suma, algunas materias que han sido tratadas como exclusivas, en realidad no lo son.
- Por otra parte, casi todas las materias que ahora figuran en el art. 10, puntos 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 vienen del art.11 actual. Solo la 10.47 es la única nueva y desde cierta perspectiva se podría considerar como exclusiva.
- Las materias de los artículos 12.7 y 12.8 se han descolgado sin que quede clara su nueva ubicación. En principio, parece que la idea de la Comisión habría sido la de sintetizar las materias bajo la redacción “régimen económico de la seguridad social” (ver nuevo art. 12.4) Si es así, tal vez no sería del todo correcto. Por tanto, sería útil inspirarse en las propuestas de los Estatutos de Valencia y Catalunya que deslindan la materia de “sanidad” de la de “régimen económico”, e incluso dentro del ámbito de la Seguridad social distinguen el desarrollo de la legislación básica de la materia de seguridad social de la “gestión del régimen económico de la misma”.
- La consideración de la policía autonómica como competencia exclusiva es arriesgada. En la propuesta de Valencia figura bajo un artículo específico, que se contextualiza en la ley orgánica prevista en el artículo 149.1.29 CE.

Hipótesis de Propuestas:

- A) Devolver las materias del artículo 10, apartados 41 a 46 al artículo 11, o bien mantenerlas ahí, pero en concurrencia con la cláusula de cierre que se propone en el punto c) siguiente.

- B) La materia de seguridad social no contributiva (art. 10.14 nuevo) pasarla al art. 11.
- C) Redactar un apartado de cierre del art. 10 en el sentido de que se dijese que *“las competencias señaladas en este artículo se entienden asumidas sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado por la Constitución”*, o redacción similar.
- D) Recuperar la mención expresa de las materias de los artículos 12.7 y 12.8, que podrían pasar a quedar incluidos dentro del ámbito del art. 11, de la siguiente manera: *“gestión de las prestaciones en el marco del sistema de la seguridad social”* (por tanto, se suprime la referencia al Inerser, por anacrónica y en cuanto a los servicios sociales, estos ya se encuadran en el nuevo artículo 10.14 puesto en relación con la nueva cláusula de cierre antes citada) Por otra parte, completar el art. 11.5 aprobado, que quedaría así *“coordinación hospitalaria y gestión de la asistencia sanitaria de la seguridad social”*. Como podrá advertirse, estas redacciones son más sintéticas que las de las propuestas de Valencia o Catalunya, aunque nada se opondría a realizar una traslación más o menos literal de las mismas en artículos independientes.
- E) La materia policía autonómica llevarla a un artículo independiente de la siguiente
- F) En el art. 11.9, en lo referido a pesca en el mar territorial, podríamos pasarlo al art. 10, del mismo que allí estaba como exclusiva la pesca en aguas interiores (art. 10.9), pues a fin de cuentas lo aprobado es para hacer coherente una y otra.



Nota al Anexo:

1. En sombreado amarillo, las referencias al Estado que han sido suprimidas.
2. En negrita, en general las novedades.
3. En negrita azul, las novedades relacionadas con referencias estatales en el vigente Estatuto.
4. En verde, materias del actual art.11 que pasan en principio al art.10, o materias de alguna singularidad dentro de este documento.
5. En rojo, las notas marginales relativas a las materias del art. 10 aprobado provisionalmente que provienen del art.11 (antes consideradas en letra verde)

ANEXO I

<u>TITOL II</u> <u>DE LES COMPETENCIES DE LA COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS</u>	
<p>Article 10. <i>La Comunitat Autònoma té la competència exclusiva en les matèries següents:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Organització, règim i funcionament de les seves institucions d'autogovern en el marc de l'Estatut present.</i> 2. <i>Alteracions dels termes municipals i denominació oficial dels municipis i topònims.</i> 3. <i>Ordenació del territori, litoral inclòs, urbanisme i habitatge.</i> 4. <i>Obres públiques dins el territori de la Comunitat Autònoma que no siguin d'interès general de l'Estat.</i> 5. <i>Ferrocarrils, carreteres i camins. El transport realitzat per aquests mitjans, per cable i per canonada. Ports, aeroports i heliports no qualificats d'interès general per l'Estat, i ports de refugi, ports, aeroports i heliports esportius.</i> 6. <i>Transport marítim, exclusivament entre ports o punts de la Comunitat Autònoma,</i> 	<p>Article 10.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organització, règim i funcionament de les seves institucions pròpies en el marc d'aquest Estatut.

sense connexió amb altres ports o punts d'altres àmbits territorials.

7. *Centres de contractació i terminals de càrrega en matèria de transports.*

8. *Règim d'aigües i aprofitaments hidràulics, canals i regatges. Aigües minerals i termals. Ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics.*

9. *Monts, aprofitaments forestals, vies pecuàries i pastures. Tractament especial de les zones de muntanya.*

10. *Agricultura i ramaderia, d'acord amb l'ordenació general de l'economia.*

11. *Turisme.*

12. *Esport i lleure.*

13. *Joventut i tercera edat.*

14. *Acció i benestar socials. Desenvolupament comunitari i integració. Sanitat i higiene.*

15. *Artesania.*

16. *Vigilància i protecció dels seus edificis i de les seves instal·lacions. Coordinació i totes les altres facultats, en relació amb les policies locals, en els termes que estableixi una llei orgànica.*

10. **Agricultura i ramaderia.**

13. **Joventut i gent gran.**

14. **Desenvolupament comunitari i integració, sanitat i higiene, i benestar social, en especial:**

- **seguretat social no contributiva,**
- **política de protecció dels disminuïts físics, psíquics i sensorials,**
- **política d'atenció a persones dependents.**

➤ Així mateix la Comissió acorda incloure tres paràgrafs nous on es faci referència a la protecció social de la família; la conciliació de la vida familiar i laboral; i les polítiques d'igualtat de sexes.

17. Fires i mercats interiors.

18. Foment del desenvolupament econòmic dins el territori de la Comunitat Autònoma, d'acord amb les bases i la coordinació general de l'activitat econòmica.

19. Pesca i activitats recreatives en aigües interiors, cria i recollida de marisc, aqüicultura i caça.

20. Arxius, biblioteques i museus que no siguin de titularitat estatal. Conservatoris de música, serveis de belles arts, hemeroteques i institucions semblants.

21. Patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, científic i paisatgístic d'interès per a la Comunitat Autònoma, sense perjudici del que disposa l'article 149.1.28a de la Constitució.

22. Cultura.

23. Conservació, modificació i desenvolupament del dret civil de la Comunitat Autònoma.

➤ La Comissió acorda no pronunciar-se sobre la creació d'una policia autonòmica. No obstant, s'acorda eliminar les limitacions establertes en aquest article –que no estiguin imposades per l'article 149.1.29 de la Constitució Espanyola- per tal de fer un marc que possibiliti la creació d'una policia autonòmica si així ho decideix el Parlament de les Illes Balears.

17. Fires i mercats no internacionals.

➤ Una minoria de la Comissió tan sols faria referència a "fires i mercats".

18. Foment del desenvolupament econòmic dins el territori de la comunitat autònoma, d'acord amb les bases i la coordinació general de l'activitat econòmica.

21. Patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, científic i paisatgístic, sense perjudici del que disposa l'article 149.1.28a de la Constitució.

23. Cinc membres de la Comissió proposen la següent redacció:

➤ " Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva en matèria de dret civil, inclosa la determinació del seu sistema de fonts, llevat de les regles relatives a l'aplicació i a l'eficàcia de les normes jurídiques, les relacions jurídicocivils relatives a les formes de matrimoni, l'ordenació dels registres i instruments públics, les bases de les obligacions contractuals, les normes per resoldre els conflictes de lleis i la determinació de les fonts del dret de competència estatal".

➤ Quatre membres són partidaris de mantenir la redacció vigent.

<p>24. Ordenació de la Hisenda de la Comunitat Autònoma, d'acord amb el que estableix aquest Estatut.</p> <p>25. Casinos, jocs i apostes, amb exclusió de les apostes mútues esportives benèfiques.</p> <p>26. Cooperatives, pòsits i mutualisme no integrat en el sistema de la Seguretat Social, <u>respectant la legislació mercantil.</u></p> <p>27. Espectacles i activitats recreatives.</p> <p>28. Estadístiques d'interès de la Comunitat Autònoma.</p> <p>29. <u>Fundacions que desenvolupin fonamentalment les seves funcions a la Comunitat Autònoma.</u></p> <p>30. Indústria, sense perjudici del que determinin les normes de l'Estat per raons de seguretat, sanitàries o d'interès militar, i les normes relacionades amb les indústries que estiguin subjectes a la legislació de mines, hidrocarburs i energia nuclear. <u>L'exercici de la competència es realitzarà d'acord amb les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general i la política monetària de l'Estat, en els termes que disposen els articles 38, 131 i números 11 i 13 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.</u></p> <p>31. Instal·lacions de producció, distribució i transport d'energia, quan el transport no surti de la Comunitat i el seu aprofitament no afecti altra comunitat autònoma. <u>Tot això sense perjudici del que estableixen els números 22 i 25 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.</u></p> <p>32. Procediment administratiu derivat de les especialitats de l'organització pròpia.</p> <p>33. Publicitat, <u>sense perjudici de les</u></p>	<p>26. Cooperatives, pòsits i mutualisme no integrat en el sistema de la Seguretat Social.</p> <p>29. Fundacions i associacions.</p> <p>30. Indústria, sense perjudici del que determinin les normes de l'Estat per raons de seguretat, sanitàries o d'interès militar, i les normes relacionades amb les indústries que estiguin subjectes a la legislació de mines, hidrocarburs i energia nuclear.</p> <p>31. Instal·lacions de producció, distribució i transport d'energia, quan el transport no surti de la comunitat i el seu aprofitament no afecti altra comunitat autònoma.</p> <p>33. Publicitat.</p>
---	---

<p><u>normes dictades per l'Estat per a sectors i mitjans específics, d'acord amb els números 1, 6 i 8 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.</u></p>	
<p>34. Servei meteorològic de la Comunitat Autònoma.</p>	
<p>35. Institucions públiques de protecció i tutela de menors.</p>	
<p>36. Establiments de borses de valors i establiment i regulació de centres de contractació de mercaderies, de conformitat amb la legislació mercantil.</p>	
<p>37. <u>Caixes d'estalvi i institucions de crèdit cooperatiu públic i territorial, en el marc de l'ordenació general de l'activitat econòmica i d'acord amb les disposicions que dins de les seves facultats dicti l'Estat.</u></p>	<p>37. Caixes d'estalvi i institucions de crèdit cooperatiu públic i territorial.</p>
<p>38. <u>Comerç interior, sense perjudici de la política general de preus, de la lliure circulació de béns en el territori de l'Estat i de la legislació sobre defensa de la competència.</u></p>	<p>38. Comerç interior. Defensa de la competència.</p>
<p>39. <u>Denominacions d'origen i altres indicacions de procedència relatives als productes de la Comunitat Autònoma en col·laboració amb l'Estat.</u></p>	<p>39. Denominacions d'origen i altres indicacions procedència relatives als productes de la comunitat autònoma.</p>
<p>40. <u>Investigació científica i tècnica en col·laboració amb l'Estat.</u></p>	<p>40. Investigació científica i tècnica. ➤ La Comissió acorda complementar aquest apartat amb qualche referència a la Societat de l'informació.</p>
<p><i>En exercici d'aquestes competències, en correspondran a la Comunitat Autònoma la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva</i></p>	<p>Es missió dels mitjans de comunicació social, de la radio i televisió, com a servei públic ,la de contribuir al desenvolupament de la Societat de l'informació, participant en el progrés tecnològic.</p>

	<p>41. “Corporacions de dret públic representatives d’interessos econòmics i professionals”.¹</p> <p>42. “Règim local”.²</p> <p>43. “Protecció del medi ambient. Normes addicionals de protecció. Espais naturals protegits. Ecologia”.³</p> <p>44. “Defensa dels consumidors i dels usuaris”.⁴</p> <p>45. “Activitats classificades”.⁵</p> <p>46. Ordenació farmacèutica.⁶</p> <p>47. Integració social i econòmica de l’immigrant”.⁷</p> <p>La Comissió acorda addicionar a l’article 48 la redacció següent: “tot incloent-hi la potestat reglamentària, la inspecció i les actuacions de foment inherents a totes les matèries de la seva competència”.</p>
--	--

¹ Viene del art. 11.15

² Viene del art. 11.2

³ Viene del art. 11.7

⁴ Viene del art. 11.9

⁵ Viene del art. 11.13

⁶ Viene del art. 11.14

⁷ Es materia nueva

<p>Article 11. <i>En el marc de la legislació bàsica de l'Estat i, si pertoca, en els termes que aquesta estableixi, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desenvolupament legislatiu i l'execució de les matèries següents:</i></p> <p>1. Règim de responsabilitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma i de l'Administració Local, <u>d'acord amb les disposicions contingudes a l'apartat 1.18a de l'article 149 de la Constitució.</u></p> <p>2. Règim local.¹</p> <p>3. Les normes processals <u>i de Dret administratiu</u> derivades de les peculiaritats del Dret substantiu de les Illes Balears o de les especials de l'organització de la Comunitat Autònoma.</p> <p>4. Estatut dels funcionaris de l'Administració de la Comunitat Autònoma i de l'Administració local, <u>sense perjudici del que disposa el número 18 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.</u></p> <p>5. Coordinació hospitalària, <u>inclosa la de la Seguretat Social.</u></p> <p>6. Contractes i concessions administratives a l'àmbit substantiu de competències de la Comunitat Autònoma.</p> <p>7. Protecció del medi ambient. Normes addicionals de protecció. Espais naturals</p>	<p>Article 11. En el marc de la legislació bàsica de l'Estat corresponen a la comunitat autònoma de les Illes Balears el desenvolupament legislatiu i l'execució de les matèries següents:</p> <p>1. Règim jurídic i sistema de responsabilitat de l'Administració de la comunitat autònoma i de l'Administració Local.</p> <p style="text-align: right;">procediment</p> <p>3. Estatut dels funcionaris de l'Administració de la comunitat autònoma i de l'Administració local.</p> <p>➤ Així mateix la Comissió recomana al Parlament de les Illes Balears analitzar les dues alternatives de substituir l'expressió "funcionaris de l'Administració de la comunitat autònoma i de l'Administració local" per la de "funcionaris de les administracions de la comunitat autònoma" o deixar l'actual redacció, amb l'objectiu final de poder abraçar totes les administracions de les Illes Balears. Es fa constar que una majoria dels vocals aposta per la primera alternativa.</p> <p>4. Coordinació hospitalària.</p>
--	---

¹ Es transfereix a la proposta de l'article 10.42

<p>protegits. Ecologia.¹</p> <p>8. <u>Ordenació i planificació de l'activitat econòmica de les Illes Balears, en l'exercici de les competències assumides en el marc d'aquest Estatut.</u></p> <p>9. <i>Defensa dels consumidors i usuaris, d'acord amb les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general i la política monetària de l'Estat, les bases i coordinació general de la sanitat, en els termes del que disposen els articles 38, 131 i en els números 11, 13 i 16 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.</i></p> <p>10. Règim miner i energètic.</p> <p>11. <u>Premsa, ràdio, televisió i altres mitjans de comunicació social, en el marc de les normes bàsiques que l'Estat estableixi d'acord amb el número 27 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.</u>²</p> <p>12. <u>Ordenació del sector pesquer.</u></p> <p>13. <i>Activitats classificades.</i>³</p> <p>14. <i>Ordenació farmacèutica, sense perjudici del que disposa l'article 149.1.16a de la Constitució</i>⁴.</p> <p>15. <i>Corporacions de dret públic representatives d'interessos econòmics i professionals.</i></p>	<p>6. Ordenació i planificació de l'activitat econòmica de les Illes Balears.</p> <p>8. Mitjans de comunicació social.</p> <p>➤ La Comissió acorda que es podria complementar aquest apartat amb qualche referència a la Societat de l'informació:</p> <p>Es missió dels mitjans de comunicació social, de la radio i televisió, com a servei públic, la de contribuir al desenvolupament de la Societat de l'informació, participant en el progrés tecnològic.</p> <p>9. Ordenació del sector pesquer. Pesca marítima al mar territorial.</p> <p>10. Corporacions de dret públic, representatives d'interessos econòmics i professionals.</p>
---	--

¹ Es transfereix a la proposta de l'article 10.43

² Es transfereix a la proposta de l'article 10.44

³ Es transfereix a la proposta de l'article 10.45

⁴ Es transfereix a la proposta de l'article 10.46

<p>16. <u>Sistemes de consultes populars a l'àmbit de les Illes Balears, de conformitat amb el que es disposi a la llei a què fa referència l'article 92.3 de la Constitució i a d'altres lleis de l'Estat en els termes prevists a l'article 149.1.32a de la Constitució.</u></p>	<p>11. Sistemes de consultes populars a l'àmbit de les Illes Balears.</p> <p>12. Protecció civil. Emergències. (ve del art. 12.4)</p> <p>13. Seguretat social, excepte la gestió econòmica.</p>
<p>Article 12. Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els termes que estableixin les lleis i les normes reglamentàries que en desenvolupament de la legislació pròpia dicti l'Estat, la funció executiva en les matèries següents:</p>	<p>Article 12..</p> <p>➤ Es planteja una qüestió de filosofia de l'article, de manera que la majoria dels vocals proposa conservar l'actual redacció, mentre que dos ponents suggereixen la possibilitat que la potestat reglamentària correspongui a la comunitat autònoma de les Illes Balears.</p> <p>➤ La Comissió es plantejarà traslladar com article específic el contingut de l'article 12.1 al tractar l'acció exterior.</p>

<p>1. Execució, dins el seu territori, dels tractats i convenis internacionals i dels actes normatius de les institucions supranacionals, en allò que afectin les matèries pròpies de la competència de la Comunitat Autònoma.</p> <p>2. Expropiació forçosa.</p> <p>3. Ordenació del transport de viatgers i mercaderies que tinguin el seu origen i destinació dins el territori de la Comunitat Autònoma, sense perjudici de l'execució directa que es reservi l'Administració General de l'Estat.</p> <p>4. <u>Protecció civil</u> ¹</p> <p>5. <u>Associacions.</u> ²</p> <p>6. Fires internacionals.</p> <p>7. <u>Gestió de les prestacions i serveis socials dins el sistema de la Seguretat Social: <i>INSERSO. La determinació de les prestacions del sistema, els requisits per establir la condició de beneficiari i la finançació s'efectuaran d'acord amb les normes establertes per l'Estat en l'exercici de les seves competències, de conformitat amb el que disposa el número 17 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.</i></u></p> <p>8. <u>Gestió de l'assistència sanitària de la Seguretat Social, d'acord amb el que preveu el número 17 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució, reservant-se l'Estat l'alta inspecció conduint al compliment de la funció a què es refereix aquest precepte.</u></p> <p>9. Gestió de museus, biblioteques i arxius de titularitat estatal que no es reservi l'Estat. Els termes de la gestió seran fixats mitjançant convenis.</p> <p>10. Pesos i mesures. Contrast de metalls.</p>	<p>➤ La Comissió acorda mantenir aquesta redacció després d'haver elevat consulta a la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, i a l'Advocacia de la comunitat autònoma.</p> <p>4. Règim econòmic de la Seguretat Social.</p>
--	---

¹ Es transfereix a la proposta de l'article 11.12

² Es transfereix a la proposta de l'article 10.29

<p>11. Plans establerts per l'Estat per a la implantació o reestructuració de sectors econòmics.</p> <p>12. Productes farmacèutics.</p> <p>13. Propietat industrial.</p> <p>14. Propietat intel·lectual.</p> <p>15. <u>Laboral. De conformitat amb el número 7 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució, correspon a l'Estat la competència sobre legislació laboral i l'alta inspecció. Queden reservades a l'Estat totes les competències en matèria de migracions interiors i exteriors, fons d'àmbit nacional i d'ocupació, sense perjudici del que estableixin les normes de l'Estat sobre aquestes matèries.</u></p> <p>16. Salvament marítim.</p> <p>17. <u>Crèdit, banca i assegurances, d'acord amb els punts 6, 11 i 13 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.</u></p> <p>18. Sector públic estatal a l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma, la qual participarà en les activitats que corresponguin.</p> <p>19. Ports i aeroports amb qualificació d'interès general, quan l'Estat no se'n reservi la gestió.</p>	<p>11. Execució de la Legislació Laboral, inclosa la Inspecció de Treball. Formació professional continua.</p> <p>13. Crèdit, banca i assegurances.</p> <p>15.</p> <p>L'Estat i la Comunitat Autònoma podran establir mecanismes de gestió compartida en els ports i aeroports declarats d'interès general.</p> <p>16. Règim penitenciari.</p> <p>17. Protecció de dades de caràcter personal</p> <p>18. Abocaments industrials i contaminats en les aigües territorials de l'Estat corresponents al litoral de les Illes Balears.</p>
---	--

	<p>19. La gestió del domini públic maritimoterrestre, especialment en allò relatiu a l'atorgament d'autoritzacions, l'execució d'obres i actuacions al litoral que no siguin d'interès general; la policia administrativa a la zona de domini públic maritimoterrestre; concessions i ancoratges. A aquests efectes, s'entén per domini públic maritimoterrestre el comprès tant per l'àmbit terrestre com per les aigües interiors i el mar territorial.</p> <p>➤ Es fa constar que una majoria de cinc vots –en contra de tres i una abstenció– proposa incloure les autoritzacions i concessions a l'anterior redacció.</p>
<p>Article 50</p> <p>1. En matèries de competència exclusiva de la comunitat autònoma, el dret propi de les Illes Balears és aplicable dins el seu territori preferentment a qualsevol altre, segons els termes prevists en aquest Estatut.</p> <p>2. En la determinació de les fonts del dret civil de les Illes Balears es respectaran les normes que s'hi estableixen.</p> <p>3. En tot allò que no estigui regulat pel dret propi de les Illes Balears, hi serà d'aplicació supletoria el dret de l'Estat.</p>	

Anexo II

Extracto de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Valencia- Temas de policía autonómica y seguridad social y sanidad

«Artículo 55.

1. La Generalitat, mediante una Ley de Les Corts creará un Cuerpo único de la Policía Autónoma de la Comunitat Valenciana en el marco del presente Estatuto y de la Ley Orgánica que determina el artículo 149.1), 29 de la Constitución Española.

2. La Policía Autónoma de la Comunitat Valenciana ejercerá las siguientes funciones:

- a) La protección de las personas y bienes y el antenimiento del orden público.
- b) La vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la Generalitat.
- c) El resto de funciones que determina la Ley Orgánica a la que hace referencia el punto 1 de este artículo.

3. Es competencia de la Generalitat el mando supremo de la Policía Autónoma y la coordinación de la actuación de las policías locales de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.

4. La Policía Judicial se organizará al servicio, y bajo la vigilancia, de la Administración de Justicia de acuerdo con lo que regulan las Leyes procesales.

5. Se creará la Junta de Seguridad, que con representación paritaria del Estado y de la Generalitat coordinará las actuaciones de la Policía Autónoma y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La presidencia la ostentará el President de la Generalitat.»

«Artículo 54.

1. Es de competencia exclusiva de la Generalitat la organización, administración y gestión de todas las instituciones sanitarias dentro del territorio de la Comunitat Valenciana.

2. En materia de Seguridad Social, corresponderá a la Generalitat:

a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, a excepción de las normas que configuran el régimen económico de ésta.

b) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

3. Corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos.

4. La Generalitat podrá organizar y administrar para aquellas finalidades, y dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes mencionadas, y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y funciones en materia de Sanidad y Seguridad Social, y se reservará el Estado la alta inspección para el cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en este artículo.

5. La Generalitat ajustará el ejercicio de las competencias que asuma en materia de Sanidad y Seguridad Social a efectos de participación democrática de todos los interesados, así como de los Sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales en los términos que la Ley establezca.

6. La Generalitat garantizará los derechos de los valencianos a conocer los tratamientos médicos a los que serán sometidos, sus posibles consecuencias y riesgos, y a dar su aprobación a aquellos de manera previa a su aplicación.

7. La Generalitat velará para que la investigación por medio de personas se ajuste a las previsiones acordadas en la convención europea sobre los derechos del hombre y la biomedicina.

ANEXO III

Extracto propuesta de Estatuto de Autonomía de Catalunya

ARTICLE 162. SANITAT, SALUT PÚBLICA, ORDENACIÓ FARMACÈUTICA I PRODUCTES FARMACÈUTICS

1. Correspon a la Generalitat, en matèria de sanitat i salut pública, la competència exclusiva sobre:

a) L'organització, el funcionament, l'avaluació, la inspecció i el control de centres, serveis i establiments sanitaris, i també la titularitat dels béns adscrits als serveis sanitaris públics.

b) L'ordenació farmacèutica.

2. Correspon a la Generalitat, en tot allò relatiu a la sanitat i la salut pública a què no fa referència l'apartat 1, la competència compartida, d'acord amb els principis de les bases i amb la coordinació general, que s'ha d'acomplir per mitjà d'objectius i estàndards mínims sobre sanitat, en els àmbits següents:

a) L'ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i l'execució de les prestacions i els serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut mental de caràcter públic en tots els nivells i per a tots els ciutadans.

b) L'ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i l'execució de les mesures i les actuacions destinades a preservar, protegir i promoure la salut pública en tots els àmbits, incloent-hi la salut laboral, la sanitat animal amb efectes sobre la salut humana, la sanitat alimentària, la sanitat ambiental i la vigilància epidemiològica.

c) La planificació dels recursos sanitaris de cobertura pública i la coordinació de les activitats sanitàries privades amb el sistema sanitari públic.

d) La formació sanitària especialitzada, que inclou l'acreditació i l'avaluació de centres i

unitats docents; la planificació de l'oferta de places per a la formació d'especialistes; la gestió de les convocatòries per a l'accés a les dites places i dels programes de formació de les especialitats i les àrees de capacitació específica; el reconeixement professional de títols d'especialistes obtinguts a l'estranger, d'acord amb els supòsits i els procediments establerts normativament; l'expedició de diplomes d'àrees de capacitació específica, i l'establiment de requisits d'accés a partir d'uns continguts bàsics.

3. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre el règim estatutari i la formació del personal que presta serveis en el sistema sanitari públic. Amb relació a l'adquisició i la pèrdua de la condició de personal al servei de les administracions públiques i sobre els seus drets i deures bàsics, la Generalitat té la competència compartida dins dels principis que estableix la legislació bàsica estatal.

4. La Generalitat participa de manera efectiva, per mitjà de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat, en la fixació de les bases i en la planificació i la coordinació estatal en matèria de sanitat i salut pública.

5. Correspon a la Generalitat la competència executiva de la legislació estatal en matèria de productes farmacèutics, d'autorització dels centres d'elaboració de productes farmacèutics i de selecció i registre de medicaments.

ARTICLE 165. SEGURETAT SOCIAL

1. Correspon a la Generalitat, en matèria de seguretat social, la competència compartida, d'acord amb els principis que estableix la legislació bàsica estatal sobre seguretat social. Aquesta competència inclou en tot cas:

- a) L'ordenació del sistema de la seguretat social.
- b) L'organització i l'administració del patrimoni

i dels serveis que integren el sistema de la seguretat social a Catalunya.

c) L'ordenació i l'exercici de totes les potestats administratives sobre les mútues d'accidents de treball i malalties professionals i sobre les institucions, les empreses i les fundacions que col·laboren amb la seguretat social.

d) La direcció i la inspecció de la gestió i l'administració de les prestacions econòmiques de la seguretat social.

e) L'ordenació de la inscripció d'empreses, les afiliacions, les altes i baixes i els altres actes d'enquadrament dels empresaris i els treballadors per compte propi i aliè.

2. Correspon a la Generalitat la gestió dels serveis del règim econòmic de la seguretat social, que inclou el reconeixement i la gestió de les prestacions econòmiques del sistema de seguretat social i l'organització d'aquests serveis.

REFORMA ESTATUTARIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

ANTECEDENTES :

NORMATIVA DE REFERENCIA

- Artículos 18.4 y 149.1.1 y 149.1.3 de la CE
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SITUACIÓN ACTUAL

La L.O 15/1999, de 13 de diciembre regula la materia sobre la protección de datos personales. Dicha materia deriva directamente de los art.18.4 y 149.1.1 de la Constitución, por lo que resulta obvio que en aplicación del art.81 de la CE, su regulación deba hacerse por ley orgánica al afectar al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas.

Recordemos que el art.18.4 señala lo siguiente:

“La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

Recordemos también que el art.149.1.1 de la CE, establece la competencia exclusiva estatal sobre:

“La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”.

Algunas comunidades autónomas, al amparo de las facultades que la LOPD les atribuye han creado sus propias agencias de protección de datos personales como la Comunidad Autónoma de Madrid (Ley 13/1995 de 21 de abril, y posterior Ley 8/2001, de 13 de julio, para adaptarse a la nueva regulación surgida de la LOPD), la Generalitat de Cataluña en el mismo año, y más

recientemente en el año 2004 se crearon: la del País Vasco, la Generalitat Valenciana y la de la Xunta de Galicia.

Las funciones que la LOPD atribuye a las CCAA sobre protección de datos vienen reguladas en los artículos 37,41, 46 y 49 , muy someramente se limitan a los siguientes aspectos:

- creación de sus propias agencias (delimitación de sus funciones, organización y régimen jurídico básico),
- creación de sus propios ficheros (procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general de creación, modificación o supresión de sus ficheros),
- la cooperación interadministrativa y otros aspectos relacionados con la seguridad,
- competencias de las agencias regionales en relación a las Administraciones Públicas que desarrollan competencias transferidas (educación y gestión sanitaria), Universidades Públicas, Ayuntamientos y Corporaciones de derecho Público (en este último caso, sólo para los ficheros creados o gestionados para el ejercicio de potestades de derecho público).

Por otro lado, la ley no permite la atribución del control sobre los ficheros privados a las Agencias Autonómicas de Protección de datos.

La regulación en el Estatuto ha de guardar relación con el sistema institucional propio o con las competencias de la Comunidad Autónoma, pues es en relación con su ejercicio como se puede suscitar la necesidad de la protección del derecho de autodeterminación informativa.

El Art. 18.4 CE tan sólo advierte de la situación del peligro que para los derechos de las personas representa un uso incontrolado de la informática y ordena al legislador para que, en virtud de su libertad de configuración, proporcione una protección adecuada de los mismos.

En lo que se refiere al desarrollo directo del artículo 18.4 CE, la LOPD complementa y prolonga lo ya establecido en el precepto constitucional concretando las facultades positivas y negativas sobre la información personal mediante las que se logra el pleno y efectivo dominio del uso de los datos personales. También define los límites o excepciones al ejercicio de dichas facultades, cuyo núcleo central está en el consentimiento informado del afectado, eje sobre el que pivota todo el régimen jurídico del ejercicio de la libertad informática, según declaró la STC 292/2000. Por su parte, la Disposición Final Segunda LOPD identifica los preceptos de la misma que tienen el rango de ley ordinaria, es decir, las materias "conexas" (STC 5/1981), lo que confirma que el resto del articulado tiene el carácter de orgánico en sentido estricto.

Lo correcto a nuestro juicio es entender que el desarrollo del derecho al que se refiere el artículo 81.1 CE no puede efectuarse por los estatutos sino, solamente, por las leyes orgánicas específicamente destinadas a ello, y que, a lo más, los preceptos estatutarios únicamente podrán reiterar lo establecido en las respectivas leyes orgánicas que hayan acometido ese desarrollo y, preferiblemente, con remisión o invocación de las mismas, asumiendo incondicionalmente y por anticipado su contenido.

Descartada la intervención estatutaria en la delimitación de los contenidos orgánicos del derecho a la autodeterminación informativa, y situándonos ya en el plano competencial, que sí es el específicamente confiado a los estatutos, podemos plantearnos si los nuevos estatutos podrían reformular la distribución competencial que resulta de la vigente LOPD al objeto de incrementar las atribuciones autonómicas. Esto es, extendiendo sus funciones sobre un espectro más amplio de ficheros, que podría alcanzar a los de titularidad

privada cuando tengan relación con las materias de competencia de la respectiva Comunidad Autónoma, y, en segundo lugar, contemplando formalmente en sede estatutaria a los órganos de garantía y protección, las Agencias, como instituciones autonómicas

Allí donde las Comunidades Autónoma tengan competencias ejecutivas y empleen ficheros con datos personales, propios o de sujetos privados, la protección habría de prestarse por sus órganos correspondientes.

La STC 290/2000, de 30 de noviembre, reserva en exclusiva para la Administración del Estado de todo cuanto tenga que ver con los ficheros privados, además de los creados por la Administración estatal, y la atribución a las autonómicas de las funciones relativas a los ficheros de las Administraciones Públicas de su ámbito territorial.

“A este fin –prosigue-, la LORTAD ha atribuido a la Agencia de Protección de Datos diversas funciones y potestades, de información, inspección y sanción, para prevenir las violaciones de los derechos fundamentales antes mencionados. Y dado que la garantía de estos derechos, así como la relativa a la igualdad de todos los españoles en su disfrute es el objetivo que guía la actuación de la Agencia de Protección de Datos, es claro que las funciones y potestades de este órgano han de ejercerse cualquiera que sea el lugar del territorio nacional donde se encuentren los ficheros automatizados conteniendo datos de carácter personal y sean quienes sean los responsables de tales ficheros.”

Sin embargo puede discutirse si existe razón objetiva suficiente para que las Comunidades Autónomas no asuman funciones normativas y ejecutivas y la acción administrativa directa e inmediata para hacer efectivos los límites a la autonomía de la voluntad que en tales relaciones se desarrolla y cuya definición corresponde al legislador orgánico (STC 173/1998).

Según esa misma jurisprudencia, lo que ha de hacerse para procurar la igualdad en la aplicación de una regulación en la que han de articularse actuaciones del Estado y de las Comunidades Autónomas es acudir a las fórmulas de cooperación y coordinación que resulten más adecuadas en cada caso, ponderando, obviamente, todos los factores que, en nuestro caso, afectan de modo directo e intenso a un derecho fundamental cuya protección se revela ciertamente problemática.

En tanto eso se produce, quizás fuera conveniente que, además de perfeccionar el funcionamiento de las Agencias autonómicas para incrementar su eficacia en la protección de los datos personales que tienen encomendada, se reforzara de manera sustancial la participación autonómica, preferentemente a través de sus propias Agencias, en los órganos rectores de la Agencia estatal que ahora prevé el artículo 38 LOPD. De esa forma, la opción a favor de una actuación unitaria en aras de la eficacia en el aseguramiento pleno del ejercicio del derecho fundamental, de cariz claramente centralizado, se compensaría con una presencia e implicación más intensas de las Comunidades Autónomas. Una medida de gran importancia que contribuiría a una mayor integración del sistema y que no supondría merma alguna de la independencia ni de la capacidad operativa de la Agencia, pues esa participación no afectaría a su funcionamiento ordinario sino a las directrices generales y a la orientación de sus órganos rectores.

PROPUESTA PARA EL EAIB

La fórmula más respetuosa con las reglas de reparto competencial sería decir que corresponde a la Comunidad Autónoma regular por ley el ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa y la protección de datos personales con respecto a los ficheros de su competencia.

También cabría precisar, siguiendo la técnica profusamente empleada por el proyecto de reforma del estatuto catalán, que el título competencial autonómico comprenderá, en todo caso, las relacionadas con los ficheros de titularidad de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma y de los entes y organismos de cualquier clase, vinculados o dependientes de aquellas, sea cual sea su régimen jurídico, incluidos los que revistan la forma de sociedades mercantiles, fundaciones o similares. Aclaración que, al estar contenida en una norma integrante del bloque de la constitucionalidad (artículo 28 LOTC) serviría para resolver las dudas sobre su alcance concreto.

A la previsión competencial podría unirse la atribución al órgano de garantía, la Agencia autonómica o autoridad equivalente, de las funciones indicadas. No obstante, dado que el estatuto goza de una fuerza formal pasiva superior a las demás leyes orgánicas y que, por tal motivo, su reforma es muy dificultosa, sería contraproducente que la norma estatutaria entrara en el detalle de la configuración del mencionado órgano. Una regulación completa del mismo en los estatutos proporcionaría un rango muy elevado a esa disciplina pero a costa de la rigidez que ello supondría en relación con cuestiones que, por definición, son instrumentales y están sujetas a necesidades de adaptación a una realidad cambiante. Así, pues, se impone la parquedad en la remisión normativa que, como mucho, podría orientar la regulación legal indicando los principios que debería observar en todo caso.

Un buen ejemplo de cómo podría producirse la incorporación a los estatutos el derecho a la autodeterminación informativa es la que figura en el artículo 30 de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Dicho precepto, que no ha merecido objeciones en el Dictamen emitido por el Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña, dice lo siguiente:

“Todas las personas tienen derecho a la protección de los datos personales contenidos en los ficheros que son competencia de la Generalidad y el derecho a acceder a ellos, a examinarlos y a obtener su rectificación. Una autoridad independiente, designada por el Parlamento, ha de velar por el respeto de estos derechos en los términos que establecen las leyes.”

Creo que con esta fórmula, u otra similar, se puede dar un paso más en la consecución del objetivo que todos compartimos en nuestra común lucha por la plena y efectiva protección de un derecho tan importante como el de la autodeterminación informativa.



Felisa Vidal Mercadal

**INFORME DE LOS ACADEMICOS D. RAIMUNDO CLAR GARAU Y D.
MIQUEL MASOT MIQUEL SOBRE POSIBLES CUESTIONES A TENER EN
CUENTA EN LA REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA**

I.- Introducción.

Por la Honorable Sra. Vicepresidenta del Gobierno se solicitó de esta Academia de Jurisprudencia y Legislación un informe relativo a las posibles modificaciones de l'Estatut de autonomia de les Illes Balears, cuya última redacción fue efectuada por ley orgánica 3/1999 de 8 de Enero.

La Academia, en su reunión de 11 de Abril de 2005, aceptó el encargo y acordó nombrar una Comisión compuesta por cuatro Académicos para elaborar un proyecto de informe, integrando la misma D. Raimundo Clar Garau, D. Rafael Gil Mendoza, D. Félix Pons Irazazábal y D. Miquel Masot Miquel.

D. Rafael Gil Mendoza y D. Félix Pons Irazazábal manifestaron que, ante el hecho de formar parte de la Comisión oficialmente nombrada para asesorar en la reforma del Estatuto, no les parecía prudente participar en esta Comisión. Y puestos estos hechos en conocimiento de la Honorable Sra. D^a Rosa Estarás, por la misma se comprendió tal actitud, se consideró que de hecho la Academia estaba –a través de ellos- suficientemente representada en el proyecto de reforma, y, en definitiva, se podía dejar sin efecto el encargo.

Como sea, empero, que los otros dos académicos nombrados.–D. Raimundo Clar Garau y D. Miquel Masot Miquel- habían iniciado por su parte los trabajos, se ha elaborado por los mismos el presente informe, en el que se recogen sus apreciaciones personales, y no –cual es de rigor por lo expuesto- el parecer de la Academia como corporación.

No ha movido otro propósito que el de aportar algún razonamiento que tal vez pueda ser de utilidad en este proyecto de reforma tan vital para el futuro de la Comunidad Autónoma.

Ha de precisarse, finalmente, que los dos miembros de la Academia autores del informe no han tratado de hacer coincidir sus criterios, a menudo discrepantes. Precisamente por considerar que de esta manera resulta una mayor aportación de ideas para su posible contemplación. Sin más preámbulo se expresan, pues, las diferentes cuestiones tratadas por los académicos abajo firmantes.

II.- El reconocimiento del hecho insular.

Por el Académico Sr. Clar se ha manifestado que puede ser un error y un defecto de técnica jurídico-legislativa, sin entrar en los aspectos políticos del tema, introducir este reconocimiento en el Estatuto. Indica que donde debe estar recogido el reconocimiento del hecho insular no es en el Estatuto sino en nuestra Constitución, donde está perfectamente recogido (art. 138), así como en la futurible Constitución Europea. Por ello, el Estatuto cumple con decir que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears está integrada por las de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Cabrera y demás adyacentes.

En definitiva, el “reconocimiento” de la insularidad ha de ser hecho por la parte que está enfrente, que es la que debe hacer algo en compensación a esta insularidad. Si las Constituciones lo reconocen podremos exigir algo a cambio. Por ello concluye que no añadimos nada haciendo esta manifestación y se comete un error de técnica legislativa.

Señala también que la influencia del hecho insular está relacionada con la superficie del territorio y la demografía. Cuanto menores sean más se agrava la situación. No son las mismas las consecuencias de la insularidad en Formentera que en Mallorca. Pensemos en transporte, hospitales y muchos otros servicios cuyo coste es muy superior. Quizás sobre esta base se podrían intentar establecer baremos a efectos de las reclamaciones al Estado Español o a la Unión Europea.

Sobre el particular expresado, el académico Sr. Masot matiza que, si bien coincide con lo expuesto en cuanto a que lo natural es que reconozca el hecho insular el ente que, de alguna forma, ha de asumir determinadas actuaciones para compensar las disfunciones que del mismo se derivan, razones de carácter pragmático —e incluso político— pueden determinar que no sobre tal declaración en el Estatuto de Autonomía. En este sentido, es difícil que se nos lleguen a hacer estas compensaciones y a reconocernos el régimen derivado de nuestra insularidad si nosotros no empezamos proclamándolo. En cambio, sí puede ser prematuro el establecimiento de baremos, que se adscribirían más en una situación en que el hecho insular diera lugar ya a convenios y pactos.

III.- La problemática derivada del art. 6: la vecindad civil y la vecindad administrativa.

1) Examen del apartado 1 del precepto.

Se ha manifestado por el Académico Sr. Clar que, con la Constitución en la mano y ante lo que dispone el art. 149-1-8º, el Estatut no podía regular esta cuestión ya que la vecindad civil es competencia exclusiva del Estado en todo caso, por afectar a la eficacia y aplicación de las normas jurídicas. Por tanto la Comunidad Autónoma no tenía competencia para dictar esta norma.

De todos modos, es evidente –matiza el Académico Sr. Masot- que no se interpuso recurso de inconstitucionalidad y por ello la norma se ha integrado en nuestro Ordenamiento jurídico. Se benefició, indudablemente, de un especial momento de benevolencia con que se contemplaron los diversos Estatutos que llevaron a la realidad el modelo autonómico proclamado por la Constitución.

Realmente, -y en ello se coincide- la técnica legislativa que se apunta en la redacción del art. 6 es harto deficiente, puesto que mezcla los conceptos de condición política y vecindad administrativa con los de vecindad civil, cuya línea de delimitación es, por otra parte, bastante clara.

Entrando en el examen del apartado 1 del precepto, el mismo establece que, a los efectos del Estatuto, tienen la condición política de ciudadanos de la Comunidad Autónoma los españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de las Illes Balears.

Se da la circunstancia de que algunos estatutos de autonomía han suprimido la exigencia de ser españoles, con lo cual se daría la circunstancia de que la mera inscripción en el padrón municipal –ampliamente permitida por otra parte- podría convertir en ciudadanos de una Comunidad Autónoma a extranjeros residentes en la misma. De todos modos, la referencia a las leyes generales del Estado delimitaría sus derechos políticos dada la prevalencia en todo caso del régimen electoral general, según resulta de las disposiciones normativas del Estado y de la Unión Europea. Por ello, la cuestión contemplada tiene un carácter más político que estrictamente jurídico. Aunque se puede adelantar la opinión de que no sobra la exigencia de la nacionalidad española, por ser la condición política de ciudadano de una Comunidad Autónoma una característica yuxtapuesta a la españolidad. Pero es también obvio que muchas personas y algunos partidos políticos no estarán de acuerdo con esta afirmación.

2) Examen del apartado 2 del precepto.

El apartado 2 del art. 6 dispone que los extranjeros que, teniendo vecindad en cualquier municipio de las Illes Balears, adquirieran la nacionalidad española, estarán sujetos al Derecho civil de las Illes Balears mientras mantengan esta vecindad, y salvo en el caso de que manifiesten su voluntad en sentido contrario.

Se han expresado diversas opiniones sobre el precepto, las cuales podríamos sintetizar del siguiente modo:

A) Su supresión.

Es cierto, que en el momento de redactar y aprobar el Estatuto tenía su justificación, dada la norma que establecía el art. 15 del C.c., al atribuir al extranjero que adquiría la nacionalidad española la vecindad de Derecho común. Pero, en la actualidad, el art. 15 C.c. está reformado por la ley 18/1990 de 17 de diciembre y no impone ninguna vecindad determinada, sino que establece una opción entre varias. Sin olvidar que el art. 15 C.c. es un desarrollo por parte del Estado de las competencias exclusivas que le atribuye el citado art. 149-1-8º, que, por ello, es de obligado cumplimiento en todo el Estado.

Realmente el art. 15 del Código civil ha eliminado el agravio a que daba lugar el precepto en su anterior redacción, dando al extranjero que adquiere la nacionalidad española la posibilidad de optar entre varias vecindades civiles, como son la correspondiente al lugar de residencia, la del lugar de nacimiento, la de cualquiera de sus progenitores o adoptantes o la del cónyuge.

En el terreno de los principios jurídicos podría ser acertada la posible supresión del precepto, por entender que del título I del Código civil se deriva –mediante el ejercicio de la opción– el sistema de atribución al extranjero de una determinada vecindad civil, con la obligada secuela de la sujeción al Derecho propio de la misma.

Pero, por otra parte, cree el Académico Sr. Masot que el Estatuto no debe renunciar a proclamar el ámbito de sujeción al Derecho civil propio. Por ello se relacionan a continuación otras iniciativas en cuanto a la modificación del precepto.

B) La eliminación de las referencias –en lo que respecta a los extranjeros– a la vecindad administrativa.

Ya antes se ha apuntado que las alusiones a la vecindad administrativa trastocan el criterio de atribución de los diferentes Derechos autonómicos territoriales, que no es otro que la vecindad civil. Además, el precepto no se refiere a todos los extranjeros sino sólo a los que adquieren la nacionalidad española, y éstos, de acuerdo con lo prevenido en el art. 15 C.c. y legislación del Registro civil, deberán –tal es la palabra que emplea el precepto- haber ejercitado la opción a favor de algunas de las posibles vecindades civiles que el mismo indica.

Tratando, pues, de armonizar el contenido del art. 6.2 del Estatuto con el régimen general del art. 15 C.c., parecería oportuno sustituir la palabra “vecindad” –que en el precepto se refiere a la administrativa- por “residencia”, que es, precisamente, el concepto correspondiente a la primera de las opciones que comprende el art. 15. Por otra parte, al excluir del juego del art. 6.2 el supuesto de expresión de voluntad contraria a la adquisición de la vecindad civil balear – la correspondiente al lugar de residencia- ello armoniza con las posibilidades de opción que establece el precepto del Código civil.

Para el Académico Sr. Masot resulta inoportuna la exigencia del art. 6.2 de que lo dispuesto en el precepto se aplicará “mientras mantengan esta vecindad”, al hacerse referencia a la meramente administrativa. La cuestión debe regularse por las reglas generales de la vecindad civil; y, consiguientemente, mientras mantengan la vecindad civil balear –aunque pasen a residir fuera de las Islas- deben estar sujetos al Derecho civil balear.

De acuerdo con ello, el precepto podría configurarse de la siguiente manera:

“El extranjero que, residiendo en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma balear, adquiere la nacionalidad española, estará sujeto al Derecho civil de las Illes Balears, salvo que haya manifestado su voluntad en sentido contrario”.

C) ¿Puede hablarse de la existencia de varias vecindades civiles en Baleares?

Por el Académico Sr. Clar se ha dicho que quizás debería hacerse una referencia a la posibilidad de existencia de varias vecindades civiles en Baleares. De un lado la “mallorquina-menorquina” y, de otro la ibicenca-formenterense, ya que ambas tienen un Ordenamiento jurídico diferente que son los Libros correspondientes de la Compilación de D° Civil. No es problema de insularidad sino una consecuencia de la diversidad jurídica en unas islas y otras.

El problema no es teórico. Según el Código civil –sigue opinando el Académico Sr. Clar- la vecindad civil determina la ley aplicable a una persona (art. 14 C.c.) y se adquiere por diez años de residencia continuada (o, en casos especiales, con dos años, más una manifestación en el Juzgado). Si la vecindad civil “balear” se diversifica en dos ¿bastaría con residir cinco años en Mallorca y otros cinco en Ibiza? O, por el contrario, ¿harían falta diez años en cada sitio? Tenemos muchas dudas –concluye- sobre si el Estatuto con ello invadiría una competencia exclusiva del Estado, si bien, en cualquier caso, la aprobación del Estatuto por las Cortes Generales podría corregir este defecto.

A juicio del Académico Sr. Masot la cuestión tiene un calado político considerable, pues no deja de presentarse como un obstáculo importantísimo en el difícil camino, en el que a pesar de todo se va avanzando, de búsqueda de lo que nos une a las diversas Islas.

Por otra parte, la escisión de la vecindad civil balear en mallorquina-menorquina e ibicenca-formenterense, cual se propugna, no sería bien recibida en la isla de Menorca, dado que su Derecho presenta algunas diferencias respecto del de Mallorca, cifradas en la importante figura contractual de la sociedad rural y en la prohibición de los contratos sucesorios.

En realidad, el problema apuntado está resuelto –a juicio del Académico Sr. Masot- por el art. 15.4 C.c., según el cual la dependencia personal respecto a una comarca o localidad civil propia o distinta, dentro de la legislación especial o foral del territorio correspondiente, se regirá por las disposiciones de este artículo y las del anterior. Según el precepto, por tanto, sería precisa la residencia continuada de 10 años en una de las Islas para la aplicación del Derecho de la misma, sin que se pudieran acumular los años de residencia en una u otra. Todo ello salvo declaración del interesado a los dos años de residencia continuada. De todos modos la situación apuntada –aunque obviamente puede darse- no deja de ser peculiar.

No es solamente en nuestras Islas donde se plantea el tema de las diferencias normativas dentro del propio territorio de la Comunidad Autónoma. Es un ejemplo conocido de este fenómeno el Derecho local de la comarca de Tortosa, que tiene un régimen peculiar sobre bastantes instituciones, mas no por ello se ha previsto la creación de una vecindad civil escindida de la catalana.

IV.- La eficacia territorial de las normas emanadas de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma (art. 7 Estatuto).

1) ¿Innecesariedad del precepto?

Este es el criterio sustentado por el Académico Sr. Clar, señalando que la eficacia de las normas jurídicas viene establecida en el Título Preliminar del C.c., en tanto en cuanto es el desarrollo de una competencia exclusiva del Estado; “las normas relativas a la eficacia y aplicación de las Leyes”. No corresponde, por tanto, al Estatuto determinar el ámbito de aplicación de las mismas, sino al Estado. Lo hace en los artículos 8 (leyes penales, de policía y de seguridad pública; las leyes procesales), 10 (la posesión, la propiedad y de los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, cuando los bienes estén situados en Baleares). Las que constituyen el estatuto personal acompañan a las personas aunque trasladen su residencia. Se considera, en definitiva, que no es suficiente el dejar a salvo las normas de derecho internacional privado o regional. Y concluye en que el artículo se podría suprimir sin que se alterara nada el régimen jurídico.

Sin perjuicio de reconocer la corrección del razonamiento, el Académico Sr. Masot entiende que los Estatutos deben proclamar el principio de territorialidad de su Derecho, debiéndose, por tanto, aprovechar la declaración existente en el art. 7, si bien tratando de mejorar la redacción del precepto.

2) La proclamación del principio de territorialidad del Derecho balear.

Es un argumento que abona, sin duda, la conveniencia de mantener el principio de territorialidad la sentencia del Tribunal Constitucional 156/1993 que, como es sabido, suprimió del art. 2 de la Compilación balear las palabras “y serán de aplicación a quienes residan en él, sin necesidad de probar su vecindad civil”; con ello se pone de relieve la exigencia de suprimir cualquier resquicio de duda que pudiera existir en cuanto a que las normas integrantes del Derecho balear se han de aplicar en el territorio de la Comunidad Autónoma de manera inmediata y directa, salvo que se pruebe –por exigencias del estatuto personal- la necesidad de resolver el caso de acuerdo con una ley distinta. Se trata, en definitiva, de “normalizar” la aplicación de nuestro Derecho, olvidando viejas sentencias que no aplicaban a un matrimonio mallorquín el régimen de separación de bienes, por no haberlos probado su vecindad civil en la Isla.

Consiguientemente, no sobra –según el Académico Sr. Masot- la proclamación del principio de territorialidad del Derecho balear.

3) ¿Existe reiteración excesiva al hacerse referencia en el precepto a las normas y disposiciones de los poderes públicos y al Derecho civil balear?

De entrada la reiteración existe, dado el significado parecido –aunque no igual– de normas y disposiciones y el hecho innegable de que la Compilación del Derecho civil balear ha sido aprobada por una norma parlamentaria. Pero se impone hacer dos precisiones.

A) Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua la palabra “disposición” significa “precepto legal o reglamentario, deliberación, orden y mandato de la Autoridad”. Indudablemente, –ha dicho el Académico Sr. Clar– sólo las dos primeras significaciones se avienen con la atribución de eficacia territorial, pues los órdenes y mandatos pueden circunscribir su ámbito de vigencia a una persona; y, por otra parte, la deliberación parece un estado previo a la decisión en que se traduce un precepto, orden o mandato cuando emana de un órgano colegiado.

Para el Académico Sr. Masot –quien comparte estas opiniones– podría acudirse a la solución de entender que las disposiciones de los poderes públicos con eficacia territorial son solamente las que se refieren a situaciones jurídicas no individualizadas, proclamándolo así expresamente el precepto. O considerar que la eficacia ha de entenderse como –en palabras del Profesor De Castro– la creación de un deber jurídico general de reconocimiento y acatamiento de los efectos de la disposición; y, consiguientemente, incluso una disposición relativa a una situación individualizada tendría eficacia en el territorio, porque todos los moradores del mismo deben respetarla.

B) En lo que respecta al Derecho civil propio –sin perjuicio de reconocer que la Compilación actual fue aprobada mediante norma parlamentaria– se juzga oportuna su inclusión en el precepto. Y ello por la siguiente razón: el Derecho civil balear no se compone sólo de normas, sino que viene integrado por una conjunción de diversos elementos; los más importantes son –obviamente– leyes y costumbres, pero se sitúan también en el mismo los principios generales del Ordenamiento jurídico balear, el Derecho romano y el Derecho histórico que, en su conceptualización de tradición jurídica balear, constituyen un importantísimo elemento de interpretación e integración de las normas.

Por ello se considera conveniente –a juicio del Académico Sr. Masot– mantener en el precepto la referencia al Derecho civil propio, y, en definitiva, mantener en este punto la actual redacción.

4) Las excepciones.

El precepto acaba salvando del principio de eficacia territorial "las excepciones que se puedan establecer en cada materia y las situaciones que deban regirse por el estatuto personal o por otras normas extraterritoriales".

Son tres, por tanto, los supuestos excepcionados. Así como los dos últimos son plenamente lógicos, la primera -excepciones que se puedan establecer en cada materia- no deja de plantear algunas dudas: ¿que clase de excepciones? ¿a que materias se refiere el precepto? ¿quien puede establecerlas? A juicio del Sr. Masot no es oportuna la referencia a una situación de excepción a la territorialidad sin perfilar debidamente el régimen de la misma.

Posiblemente el precepto se refiere a supuestos de incumplimiento flagrante por parte de la Comunidad Autónoma de las obligaciones impuestas por la Constitución o las leyes del Estado, en cuyo caso -ex art. 155 C.E- el Gobierno puede adoptar las medidas necesarias para conseguir el cumplimiento forzoso así como las de protección del interés general. Pero lo cierto es que el Estatuto no tiene porqué hacerse eco de estas medidas excepcionales, dado que lo esencial -y lo que en definitiva les da vigencia y eficacia- es su proclamación en el texto constitucional.

En base a cuanto antecede, el art. 7 -según el Académico Sr. Masot- podría ser del siguiente tenor literal: "Las normas y disposiciones de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su Derecho civil propio tendrán eficacia territorial, sin perjuicio de las situaciones que se hayan de regir por el estatuto personal o por otras normas extraterritoriales".

V.- Asunción de competencias por parte de la Comunidad Autónoma.

Ha indicado el Académico Sr. Clar, con cuyo razonamiento coincide el Sr. Masot, que si legal o jurisprudencialmente no existen obstáculos, sería mejor, desde el punto de vista del Estatuto, una asunción de competencias con carácter general, no sólo de las actualmente asumibles sino también de aquellas futuras que puedan surgir de alguna ampliación de la Constitución por cualquier causa. La fórmula podría ser más o menos "La Comunidad Autónoma asume todas las competencias legislativas exclusivas, incluso reglamentarias y de ejecución; las de desarrollo legislativo y ejecución y las de

mera ejecución concedidas o que pueda conceder en el futuro la Constitución Española o, en su caso, la Constitución Europea. En cada competencia concreta, y en el momento de su asunción expresa, se determinarán su alcance y condiciones si fuera preciso”.

Ello implica dos ventajas. La primera, que no hace falta modificar el Estatuto en caso de asunción de nuevas competencias. Un ejemplo claro. El art. 149-1-6º reserva al Estado “la legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del Derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas”. En el art. 10-23 de nuestro Estatuto no se reservó esta competencia y habría que modificar el Estatuto para hacerlo. La segunda, porque ayuda a paliar el problema de la distribución de competencias que hace la Constitución, la cual, por las circunstancias de aquellos momentos, siguió el peor sistema de los posibles, que consistió en enumerar las competencias exclusivas del Estado, por un lado, y la de las Comunidades Autónomas por otro. Mejor hubiera sido definir sólo las del Estado o las de las Comunidades y aclarar a quien corresponden las restantes. El hacer una nueva enumeración en el Estatuto añade más hierro a esta cuestión y más posibilidades de dudas.

De no optarse por este sistema resulta imprescindible la inclusión, entre las nuevas competencias de la Comunidad Autónoma, de las especialidades procesales que se derivan del Derecho civil balear. A título de ejemplo, ello ha permitido al Parlamento gallego dictar una legislación que introduce importantes modificaciones en la regulación del recurso de casación en materia del Derecho civil de Galicia, eliminando las limitaciones para recurrir derivadas de la cuantía litigiosa y considerando motivo casacional el error en la apreciación de la prueba que demuestre desconocimiento por parte del Juzgador de hechos notorios que supongan infracción de uso o costumbre (ley del Parlamento gallego 5/2005 de 25 de Abril).

VI.- Organización judicial.

La regulación de la materia en los arts. 51 y 52 presenta –a juicio del Académico Sr. Masot- la incongruencia de que, tras decirse en el primero de dichos preceptos que el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears es el órgano jurisdiccional en el que culmina la organización judicial de las Illes Balears, ante el cual finalizarán las instancias procesales sucesivas, se establece en el artículo siguiente un cuadro de competencias en el que la culminación de todas las instancias procesales –mediante los correspondientes recursos de casación- sólo tiene lugar en los litigios en que se aplica el Derecho civil balear.

Por ello, sería oportuno cerrar el cuadro competencial del art. 52.1 con una indicación general del tenor literal siguiente: “En cuanto la legislación del Estado lo permita, la competencia del Tribunal Superior de Justicia se extenderá al conocimiento de los recursos de casación y de revisión en todos los órdenes jurisdiccionales, respecto de los litigios sustanciados ante los Juzgados y Tribunales con sede en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears”.

Tal declaración podría ocupar el lugar del apartado 2 del art. 52, pues lo que actualmente se dispone en el mismo es absolutamente innecesario y fuera de lugar, ya que no corresponde a nuestro Estatuto de Autonomía hacer declaraciones sobre las competencias del Tribunal Supremo y sobre el recurso de casación a interponer ante el mismo.

Se propone también –según idea del también Académico Sr. Muñoz Jiménez– hacer una especial consideración de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia como órgano supremo y exclusivo en la elaboración de doctrina jurisprudencial relativa al Derecho civil balear. Ciertamente puede suceder que en un litigio sustanciado ante órganos jurisdiccionales no residenciados en nuestra Comunidad Autónoma se deba aplicar –por imposición del estatuto personal– el Derecho civil balear; en este caso, el juego de los recursos determinaría inevitablemente que conociera de la casación el Tribunal Supremo en vez de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. Indudablemente la sentencia del Tribunal Supremo tendría toda la consideración derivada del órgano jurisdiccional del que procede; pero es claro que éste no sería el que tiene la competencia para conocer del recurso de casación por infracción de Derecho civil balear según resulta de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto de Autonomía. Por ello sería conveniente que el Estatuto contuviera una declaración del siguiente o parecido tenor: “La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia –en su actuación como Sala de lo Civil– fijará, de forma exclusiva respecto de otros órganos jurisdiccionales, la doctrina resultante de la interpretación de las normas del Derecho civil balear”.

VII.- La “vacatio legis”.

El Académico Sr. Clar ha puesto de relieve la antinomia que se produce entre el art. 2.1 del Código civil –según el cual las leyes entran en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado- y el art. 27.2 del Estatuto de Autonomía, según el cual “a efectos de vigencia valdrá la fecha de publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears”. Aparecen, por tanto, dos sistemas de determinación del día inicial de la “vacatio legis”. Señala al efecto el Académico Sr. Clar que, al no existir exigencia constitucional sobre el particular –pues nada sobre ello se dice en la misma- podría pensarse que al estar aprobado el Estatuto por las Cortes Generales el texto se ha purificado. Pero, en todo caso, la antinomia es evidente.

Tal vez –a juicio del Sr. Masot- pueda ser acertado recordar la doctrina de Savigni sobre la resolución de las antinomias y, en especial, lo que dicho autor llama la conciliación sistemática, que tiene lugar asignando un objeto especial a cada uno de los textos contradictorios y fijando los límites de su aplicación. Entonces resulta diáfano que el art. 2.1 del Código civil resulta aplicable a las leyes generales del Estado, mientras que el art. 27.2 del Estatuto de Autonomía se centra exclusivamente en las del Parlament de la Comunidad Autónoma.

VIII.- Sanción y promulgación de las leyes.

El problema se suscita por el hecho de proclamar el art. 62 CE que corresponde al Rey sancionar y promulgar las leyes, con lo que se plantea la cuestión de si han de entenderse comprendidos en el precepto también las leyes autonómicas. Criterio que no rige el art. 27.2, según el cual las leyes del Parlamento serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente de la Comunidad Autónoma, el cual ordenará su publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, así como también en el Boletín Oficial del Estado.

Señala el Académico Sr. Clar que existen argumentos para mantener las posturas teóricas de extender la sanción real a sólo las leyes generales del Estado o también a las autonómicas. Así puede decirse:

a) El art. 62 Cc está en el Título II cuya rúbrica es “La Corona”, aplicable a todo el territorio nacional. Ello exigiría la sanción a todas las leyes vigentes en el Estado.

b) El art. 62 C.E. sólo habla de “leyes”, por lo tanto parece que entran todas. Tan leyes son las de las Cortes Generales como las de un Parlamento Autónomo.

c) El art. 91 C.E. dice que "El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación". Parece constituir una ratificación de la norma del art. 62.a), para el caso de las Cortes Generales, no existiendo precepto similar respecto de las leyes autonómicas.

d) Por otro lado, se dice que todas las facultades del art. 62 hacen referencia a todo el Estado; de ahí que la sanción real pueda circunscribirse a las leyes de general aplicación en el mismo.

Lo cierto es que dieciséis de los diecisiete Estatutos de Autonomía han recurrido a una fórmula idéntica: "Las leyes del Parlamento serán promulgadas en nombre del Rey por el presidente de la Comunidad Autónoma, el cual ordenará su publicación. . ." Sólo el Estatuto del País Vasco no hace referencia al Rey.

Para el Académico Sr. Clar, estos Estatutos han hecho uso de una delegación de la facultad real de sancionar las leyes, que no está recogida en la Constitución en modo alguno, a diferencia de la Justicia que -según el art. 71- se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial. Concluye que no se puede mantener la fórmula actual, siendo más precisa y correcta técnicamente la fórmula del Estatuto Vasco que elimina la sanción real.

Realmente los dos autores del informe coinciden en la consideración de que la cuestión no tiene excesiva importancia real, por ser un resto formal del derecho de veto que tenían los Reyes frente a determinadas leyes y que, desde luego, hoy no tienen. Pero también es cierto que en la Constitución no se dice expresamente que exista delegación de la sanción y promulgación de las leyes a favor de los Presidentes de las Comunidades Autónomas.

Compartiendo el Académico Sr. Masot sustancialmente este razonamiento, apunta, sin embargo, que tal vez pudiera venir en ayuda del mantenimiento del precepto en su actual redacción, el art. 152 C.E., que, entre las facultades del Presidente del Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas, establece la representación ordinaria del Estado en aquella; de lo que podría derivarse que, dentro de la misma, puede incardinarse la del Jefe del Estado en cuanto a la promulgación de las leyes del Parlamento autonómico.

IX.- Dedicación de un título del Estatuto a los principios -o a la aplicación- del Ordenamiento jurídico balear.

El académico Sr. Clar ha apuntado la posibilidad –con la que coincide el Sr. Masot- de dedicar un título del Estatut a lo que vendría a ser la parte general de nuestro Derecho, bajo las posibles rúbricas que se acaban de indicar.

Ello tiene el precedente de la actual Compilación del Derecho civil de Baleares, la cual, además de los libros dedicados a Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera, contiene un título preliminar que se titula precisamente “De la aplicación del Derecho civil de Baleares”.

Es claro que la Compilación no comprende todo el Derecho balear –ni siquiera todo el Derecho civil balear- por lo que parece oportuno que las disposiciones que regulan la aplicación de las normas integrantes de aquel se radiquen en nuestra máxima ley autonómica.

Posiblemente este título podría integrarse, de entrada, mediante la trasposición a todo el Derecho balear –y no sólo al Derecho civil- de las disposiciones contenidas en el art. 1 de la Compilación, con los arts. 6 apartado 2 y 7 del Estatuto, así como con los preceptos relativos a la aplicación de las leyes del Parlament (art. 27.2) y de los reglamentos (art. 35), amén de cualquier otra disposición que en este punto se juzgue de interés.

X.- La referencia al Derecho civil propio del art. 50.

Este precepto es plausible en sus apartados 1 y 2, relativos, respectivamente, a la aplicación preferente del Derecho propio de las Illes Balears y a la determinación de las fuentes de su Derecho civil.

En cambio suscita muchas más dudas el apartado 3, establecedor de la aplicación supletoria del Derecho del Estado en todo lo que no esté regulado por el Derecho propio de las Illes Balears.

Indica el Académico Sr. Masot que en un artículo publicado en Junio de 1.983 (“Tratamiento del Derecho civil de las Islas en el Estatuto de Autonomía”, Estudis Baleàrics) indicaba que no basta la laguna de ley, sino que es preciso, para la aplicación del Derecho del Estado, que no exista tampoco costumbre ni principio general, y que tampoco pueda acudir a la autointegración y a la analogía –tanto en su conceptualización de analogía *legis* como en la de analogía *iuris*-; pues sólo una vez agotadas estas posibilidades de autointegración del Ordenamiento cabría acudir al Derecho del Estado.

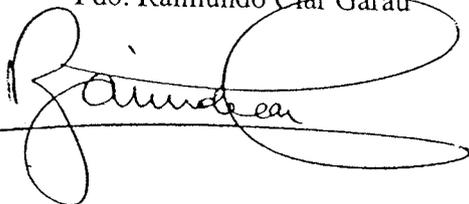
Y debiéndose también tener en cuenta que esta aplicación supletoria no podrá ir nunca en contra de los principios informadores del Derecho de la Comunidad Autónoma. E igualmente ha de precisarse que, antes de acudir a la regulación del Derecho del Estado, debe plantearse la cuestión de si la ausencia de norma autonómica puede venir motivada por el rechazo de la institución dentro de la Comunidad.

De acuerdo con todo ello sería procedente suprimir este apartado o bien darle una redacción que salvaguarde todos estos conceptos que han quedado apuntados. Tal vez la redacción podría indicar que la aplicación supletoria del Derecho del Estado sólo tendrá lugar en defecto de ley, costumbre o principio general del Ordenamiento jurídico

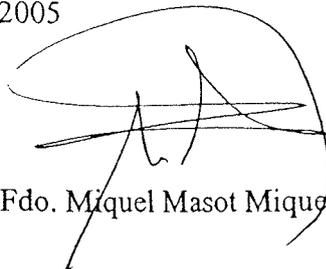
balear; y siempre que aquella no se oponga a los principios informadores del mismo ni se de la circunstancia de que la ausencia de norma autonómica obedezca al rechazo en nuestra Comunidad Autónoma de la institución regulada en la ley estatal.

Palma de Mallorca, a 29 de Junio de 2005

Fdo. Raimundo Clar Garau



Fdo. Miquel Masot Miquel



El Sr. Ignasi Ribas proposa com a vot particular un article 7 bis que digui el següent:

Article 7 bis

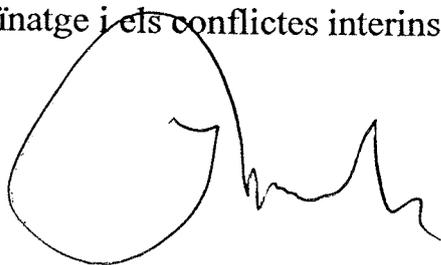
1. L'Estatut empara com a patrimoni comú de les Illes Balears el seu Dret Civil.

El Dret Civil de les Illes Balears s'interpretarà i s'integrarà prenent en consideració els principis generals que l'informen, així com les lleis, els costums, la jurisprudència i la doctrina que encarnen la tradició jurídica de les Illes.

Per manca de llei i costums del Dret Balear, s'aplicarà supletòriament el Codi Civil i d'altres lleis civils estatals, sempre que les normes d'aquestes no s'oposin als principis del seu ordenament jurídic.

2. Les normes del Dret Civil de Balears tendran eficàcia en el territori de la Comunitat Autònoma. Se n'exceptuen el casos en que d'acord amb el dret interregional o internacional privat s'hagin d'aplicar unes altres normes.

3.- El veïnatge i els conflictes interinsulars de normes es regularan pel Codi Civil.





**Govern
de les Illes Balears**

Vicepresidència i Conselleria
de Relacions Institucionals

Direcció General de Projectes
i Coordinació departamental

**Acta de la reunió de la Comissió Assessora per a la Reforma de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears**

Sessió número 34

Dia: 09/11/05

Hora: de les 16:00 a les 18:30 h

Lloc: Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals

Assistents:

Sra. Maria Rosa Estarás Ferragut, presidenta de la Comissió

Sra. Felisa Vidal Mercadal, vicepresidenta de la Comissió

Sr. Avel·lí Blasco Esteve, vocal

Sr. Rafael Gil Mendoza, vocal

Sr. Francisco Tutzó Bennássar, vocal

Sr. Román Piña Homs, vocal

Sr. Joan Font Servera, vocal

Sra. Pilar Ferrer Vanrell, vocal

Sr. Bartomeu Colom Pastor, vocal

Sr. Ignasi Ribas Garau, vocal

Sr. Fèlix Pons Irazazábal, vocal

Sr. Maximilià Morales Gómez, vocal

Sr. José Antonio Roselló Rausell, vocal i òrgan de suport

Sr. Felio José Bauzá Martorell, secretari de la Comissió

Absents

Sr. Alfonso Ripoll Escandell, vocal

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.



**Govern
de les Illes Balears**

Vicepresidència i Conselleria
de Relacions Institucionals
Direcció General de Projectes
i Coordinació departamental

2. Informe dels comissionats assistents al Congrés dels Diputats el passat dia 2 de Novembre ,sobre el debat de l'admissió a tràmit de la proposta del nou Estatut de Autonomia de Catalunya.
3. Relectura de les conclusions de la Comissió sobre l'Organització Judicial
4. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió

A l'hora convinguda s'inicia la sessió amb la benvinguda de la presidenta, qui proposa la lectura de l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.

Acords:

Informe dels Comisionats assistents al Congrés dels Diputats.

El Senyors José Antonio Roselló Rausell ,Francisco Tutzó i Bartomeu Colom, expliquen la seva impressió del debat de la presa en consideració del projecte d'estatut de Catalunya al projecte de reforma de l'Estatut de Catalunya al Congrés dels Diputats a la sessió de dia 2 de Novembre, adjuntant un document del Sr. José Antonio Roselló que resumeix les intervencions dels diferents portaveus dels grups parlamentaris.

Organització Judicial

El Senyor Ribas pretén modificar la seva proposta inicial i sense afectar a la unitat del Poder Judicial ni que sigui competència estatal, formula una proposta en tres punts:



**Govern
de les Illes Balears**

Vicepresidència i Conselleria
de Relacions Institucionals
Direcció General de Projectes
i Coordinació departamental

Article 51.

1. El Tribunal de Justícia de les Illes Balears es l'òrgan en el que culmina l'organització judicial en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma i davant el qual se esgotaran les successives instàncies processals en tots els ordres jurisdiccionals, en els termes que estableixi la Llei orgànica del Poder Judicial i les Lleis processals, sense perjudici de lo disposat en l'article 123 de la Constitució Espanyola.
2. En quan la Llei orgànica del poder Judicial i les Lleis processals ho disposin, la competència del Tribunal Superior de Justícia se estendrà al coneixement dels recursos extraordinaris de cassació i de revisió en tots els ordres jurisdiccionals, respecte dels litigis substanciats entre els jutjats i Tribunals amb seu en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de la competència del Tribunal Suprem per unificar doctrina.
3. La Sala de lo Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia - en actuació com a Sala de lo Civil- fixarà de forma exclusiva respecte d'altres òrgans jurisdiccionals , la doctrina resultant de la interpretació de les normes de Dret civil Balear.

A continuació la Sra. Felisa Vidal exposa el contingut de la seva reunió a la seu de la Direcció General del Servei Jurídic de l'Estat, on es va fer èmfasi en la unitat del Poder Judicial: que el Tribunal Superior de Justícia no es una institució autonòmica, sinó estatal al territori de la Comunitat Autònoma. Fa referència a que el projecte de reforma de l'Estatut de Catalunya no es menciona el govern del Poder Judicial ni el Ministeri Fiscal.



**Govern
de les Illes Balears**

Vicepresidència i Conselleria
de Relacions Institucionals
Direcció General de Projectes
i Coordinació departamental

El Senyor Joan Font entén que el Poder Judicial ha d'ésser únic, així com la legislació processal. Es partidari, en quan a la possibilitat d'un consell territorial del Consell General del Poder Judicial o de la cassació al Tribunal Superior de Justícia, d'oferir una redacció suficient ampla per si posteriorment es reforma la Llei Orgànica del Poder Judicial. Es mostra partidari de que qualsevol reforma ha d'ésser la mateixa a tot el territori nacional.

La presidentia sotmet als presents les següents qüestions :

1. En quan a la relació entre l'Estatut d'Autonomia i la Llei del Poder Judicial, cinc vocals es mostren partidaris de no entrar al contingut de l'Estatut i fer remissió a la Llei del Poder Judicial; mentre que els altres cinc són partidaris de condicionar el contingut de la Llei del Poder Judicial des de l'Estatut.
2. En quan a la creació d'un Consell Territorial del Poder Judicial, cinc membres es mostren partidaris de formular una remissió a la Llei Orgànica del Poder Judicial, mentre que els altres cinc consideren que s'ha d'incloure a l'Estatut la creació d'aquest òrgan segons la redacció del Senyor Joan Font , (malgrat que el Sr. Font i el Sr. Avelí Blasco no estan d'acord amb aquesta solució, però opten per proposar-la)
3. En quan a la funció del Tribunal Superior de Justícia en relació al Dret Civil Balear, es fa referència a l'informe de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, segons el qual la Sala de lo Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia, en la seva actuació com a Sala de lo Civil, és l'òrgan competent per fixar la Jurisprudència en matèria de Dret Civil Balear. En aquest sentit el Tribunal Suprem, quan conegui d'un recurs de cassació en comptes de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, aplicarà la doctrina emanada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en matèria de Dret Civil Balear. Aquest punt s'aprova amb el vot favorable de tots els vocals menys un.



**Govern
de les Illes Balears**

Vicepresidència i Conselleria
de Relacions Institucionals

Direcció General de Projectes
i Coordinació departamental

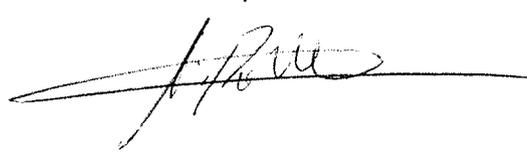
No havent-hi més temes a tractar, la presidenta dóna per acabada la sessió i convoca els assistents per a la propera, prevista per al dia 16 de Novembre.

La presidenta aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.



El secretari

Vist-i-plau
La presidenta





**Govern
de les Illes Balears**

Vicepresidència i Conselleria
de Relacions Institucionals
Direcció General de Projectes
i Coordinació departamental

**Acta de la reunió de la Comissió Assessora per a la Reforma de
l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears**

Sessió número 35

Dia: 16/11/05

Hora: de les 16:00h a les 18:30 h

Lloc: Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals

Assistents:

Sra. Maria Rosa Estaràs Ferragut, presidenta de la Comissió

Sra. Felisa Vidal Mercadal, vicepresidenta de la Comissió

Sr. Avel·lí Blasco Esteve, vocal

Sr. Rafael Gil Mendoza, vocal

Sr. Román Piña Homs, vocal

Sr. Joan Font Servera, vocal

Sra. Pilar Ferrer Vanrell, vocal

Sr. Bartomeu Colom Pastor, vocal

Sr. Ignasi Ribas Garau, vocal

Sr. Fèlix Pons Irazazábal, vocal

Sr. Maximilià Morales Gómez, vocal

Sr. José Antonio Roselló Rausell, vocal i òrgan de suport

Sr. Felio José Bauzá Martorell, secretari de la Comissió

Absents:

Sr. Ignasi Ribas Garau, vocal

Sr. Alfonso Ripoll Escandell, vocal

Sr. Francisco Tutzó Bennàssar, vocal



**Govern
de les Illes Balears**

Vicepresidència i Conselleria
de Relacions Institucionals
Direcció General de Projectes
i Coordinació departamental

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Repàs i relectura dels acords presos amb anterioritat en matèria de competències de la Comunitat Autònoma.
3. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

A l'hora convinguda s'inicia la sessió amb la benvinguda de la presidenta, qui proposa la lectura de l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.

Pel que fa referència a les competències , el Sr. José Antonio Roselló, comenta el document que s'adjunta ("Propuesta sobre Relectura de Competencias") i el Sr. Avel.lí Blasco explica que es mostra partidari de mantenir la supressió de "coletillas" i remissions a la Constitució, i a la legislació estatal, ja que l'Estat té les competències ex Constitució i no ex Estatut.

Acords:

1. En quan a l'article 10.41 la Comissió acorda que continuï amb la redacció acordada a la sessió numero 11.
2. article 10.42:

Es canvia la denominació "Règim Local" per la de "organització local" i es du a l'article 11 , la competència compartida de " règim jurídic local", ja que la jurisprudència recent del Tribunal



**Govern
de les Illes Balears**

Vicepresidència i Conselleria
de Relacions Institucionals
Direcció General de Projectes
i Coordinació departamental

Constitucional distingeix entre règim jurídic i organització, essent aquesta darrera pròpia de l'autonomia.

La Comissió es ratifica amb el text acordat en les sessions número 11, 12 i 13 dels següents articles :

3. Article 10.43
4. Article 10.44
5. Article 10.45
6. Article 10.46
7. Article 10.47

8. Com a clàusula de tancament, es revisa l'article 48 i es substitueix per la següent redacció:

“Sobre les matèries que siguin de la seva competència exclusiva, en correspon al Parlament de les Illes Balears la potestat legislativa, segons el termes prevists en aquest Estatut, sense perjudici de les competències atribuïdes per l'Estat a la Constitució, i en correspon al Govern de la Comunitat Autònoma la funció executiva, tot incloent-hi la potestat reglamentaria i la inspecció.”

9. A efectes d'emfatitzar l'activitat de Foment, es proposa un nou article – article 49 bis - amb la següent redacció:

“Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en les matèries de la seva competència, l'exercici de l'activitat de Foment”

10. En relació a la policia autonòmica , es proposa un nou article – article 12 bis - amb la següent redacció:



**Govern
de les Illes Balears**

Vicepresidència i Conselleria
de Relacions Institucionals
Direcció General de Projectes
i Coordinació departamental

"Una Llei del Parlament podrà crear un cos de policia autonòmica en el marc de la Llei Orgànica que determina l'article 149.1.29 de la Constitució"

11. En relació a la pesca marítima al mar territorial, prevista inicialment a l'article 11.9, es trasllada a l'article 10 com a competència pròpia, mentre que la ordenació del sector pesquer es conserva en aquest article 11.9.

12. En matèria de seguretat social, es matisa a l'article 10.14 que es competència exclusiva de la Comunitat Autònoma els "complements" a la Seguretat Social no contributiva.

No havent-hi més temes a tractar, la presidenta dóna per acabada la sessió i convoca els assistents per a la propera, prevista per al dia 23 de Novembre.

La presidenta aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.



El secretari

Vist-i-plau
La presidenta





**Govern
de les Illes Balears**

Vicepresidència i Conselleria
de Relacions Institucionals
Direcció General de Projectes
i Coordinació departamental

**Acta de la reunió de la Comissió Assessora per a la Reforma de l'Estatut
d'autonomia de les Illes Balears**

Sessió número 36

Dia: 23/11/05

Hora: de les 16:00 a les 18:30 h

Lloc: Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals

Assistents:

Sra. Maria Rosa Estarás Ferragut, presidenta de la Comissió
Sra. Felisa Vidal Mercadal, vicepresidenta de la Comissió
Sr. Avel·lí Blasco Esteve, vocal
Sr. Rafael Gil Mendoza, vocal
Sr. Francisco Tutzó Bennàssar, vocal
Sr. Román Piña Homs, vocal
Sr. Joan Font Servera, vocal
Sr. Alfonso Ripoll Escandell, vocal
Sra. Pilar Ferrer Vanrell, vocal
Sr. Bartomeu Colom Pastor, vocal
Sr. Ignasi Ribas Garau, vocal
Sr. Félix Pons Irazazábal, vocal
Sr. Maximilià Morales Gómez, vocal
Sr. José Antonio Roselló Rausell, vocal i òrgan de suport
Sr. Felio José Bauzá Martorell, secretari de la Comissió

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Continuació del repàs i relectura dels acords presos amb anterioritat en matèria de competències de la Comunitat Autònoma.
3. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

A l'hora convinguda s'inicia la sessió amb la benvinguda de la presidenta, qui proposa la lectura de l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.



**Govern
de les Illes Balears**

Vicepresidència i Conselleria
de Relacions Institucionals
Direcció General de Projectes
i Coordinació departamental

Acords:

1. La Comissió acorda per majoria de vots que els articles 10.23 i 11.2 continuïn amb la redacció acordada a les sessions 10 i 11.
2. En quan a l'article 56 la Comissió acorda que continuï amb la redacció acordada a la sessió número 25.

3. Protecció de dades:

El dret a la protecció de dades, com a dret fonamental que es, té la seva regulació en la Llei orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal. La Llei orgànica deixa un marge restrictiu a la Comunitat Autònoma per a la legislació de desenvolupament i competència executiva.

La Comissió acorda:

- Eliminar l'article 12.7.
- Introduir un nou punt en l'article 11 amb la següent redacció:

“ La protecció de dades de caràcter personal amb respecte als fitxers de titularitat de les Administracions Públiques de la Comunitat Autònoma i els ens u organismes de qualsevol classe vinculats o dependents d'aquelles.”

Així mateix la Comissió suggereix als Diputats del Parlament que, en cas de decidir la confecció d'un catàleg de drets i deures, es contempli el dret a la protecció de les dades personals incloses als fitxers de competències de la CAIB així com el dret l'accés als fitxers, oposició , cancel·lació i rectificació de les dades.



**Govern
de les Illes Balears**

Vicepresidència i Conselleria
de Relacions Institucionals
Direcció General de Projectes
i Coordinació departamental

No havent-hi més temes a tractar, la presidenta dóna per acabada la sessió i convoca els assistents per a la propera, prevista per al dia 14 de desembre.

La presidenta aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Vistiplau
La presidenta



**Govern
de les Illes Balears**

Vicepresidència i Conselleria
de Relacions Institucionals
Direcció General de Projectes
i Coordinació departamental

**Acta de la reunió de la Comissió Assessora per a la Reforma de
l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears**

Sessió número 37

Dia: 14/12/05

Hora: de les 16:00 a les 18:30 h

Lloc: Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals

Assistents:

Sra. Maria Rosa Estarás Ferragut, presidenta de la Comissió

Sra. Felisa Vidal Mercadal, vicepresidenta de la Comissió

Sr. Avel·lí Blasco Esteve, vocal

Sr. Rafael Gil Mendoza, vocal

Sr. Francisco Tutzó Bennássar, vocal

Sr. Román Piña Homs, vocal

Sr. Joan Font Servera, vocal

Sr. Alfonso Ripoll Escandell, vocal

Sra. Pilar Ferrer Vanrell, vocal

Sr. Bartomeu Colom Pastor, vocal

Sr. Ignasi Ribas Garau, vocal

Sr. Fèlix Pons Irazazábal, vocal

Sr. Maximilià Morales Gómez, vocal

Sr. José Antonio Roselló Rausell, vocal i òrgan de suport

Sr. Felio José Bauzá Martorell, secretari de la Comissió

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.



**Govern
de les Illes Balears**

Vicepresidència i Conselleria
de Relacions Institucionals
Direcció General de Projectes
i Coordinació departamental

2. Examen i anàlisi de conjunt de les conclusions de la Comissió d'experts.
3. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

A l'hora convinguda s'inicia la sessió amb la benvinguda de la presidenta, qui proposa la lectura de l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat

El Sr., José Antonio Roselló Rausell explica i comenta el document pre-editat que s'ha elaborat que conté la proposta d'Estatut de la Comissió Assessora del Govern de les Illes Balears. Aquest document du el títol " Proposta de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears –text refós en data de 14 de desembre de 2005".

La Sra. Pilar Ferrer explica la deficiència tècnica que detecta a la proposta de reforma de l'article 7, segons el document que acompanya.

La Comissió acorda substituir el text reformat de l'article 7 per el següent redacció:

"Sense perjudici de les normes per resoldre els conflictes de lleis i de les excepcions que pugin establir-se en cada matèria."

La Comissió acorda suprimir l'expressió " Com a Balears" de l'encapçalament de l'article 6.2.



**Govern
de les Illes Balears**

Vicepresidència i Conselleria
de Relacions Institucionals
Direcció General de Projectes
i Coordinació departamental

El Sr. Colom proposa que dins l'article 58.bis s'incloguin totes les matèries que enumera la llei del Règim Especial de les Illes Balears, en concret esmenta recursos hídrics, sector nàutic, món rural i activitat industrial tradicional. El Sr. Roselló respon que no només serien aquestes matèries sinó algunes més la qual cosa faria l'article excessivament llarg. Per aquest motiu dins l'article que en el seu moment es va sotmetre a consideració de la comissió i fou efectivament aprovat Art 58.Bis deliberadament dins l'apartat 3 les matèries de "transport", "infraestructures" i "economia" pretenien recollir l'ampli ventall de matèries i submatèries com les esmentades pel Sr. Colom, per exemple recursos hídrics s'inclouen dins l'àmbit més ample d' infraestructures; sector nàutic s'inclou dins turisme que al mateix temps s'inclou dins economia; indústria tradicional és un concepte massa curt, doncs en realitat es la indústria en el sentit ampli, que també s'inclou dins economia. L'especificació de matèries i submatèries haurà d'ésser l'objecte d'una llei ordinària nacional de desplegament.

Pel que fa a l'organització judicial, la Comissió acorda:

- Eliminar la referència a les demarcacions judicials de l'article 56.1.
- Eliminar la referència als corredors de comerç de l'article 56.2.
- Modificar l'al·lusió als registradors de la propietat i mercantils, substituint-la per registradors de la propietat, mercantils i de bens mobles, a l'article 56.2.
- Incloure la proposició " a" a l'administració de Justícia de l'article 55.3
- Afegir els procuradors al 'article 55.4 i eliminar-les associacions professionals.



**Govern
de les Illes Balears**

Vicepresidència i Conselleria
de Relacions Institucionals
Direcció General de Projectes
i Coordinació departamental

- Fer una referència a peu de pàgina a la proposta del Sr. Ignasi Ribas a l'article 51.

El Sr. Ribas proposa que també es faci una edició sistematitzada relativa als vots particulars. La presidenta accepta la proposta, amb el vist-i-plau dels membres de la comissió i assenyala que aquesta edició serà complementària a la del text refós.

El Sr. Morales vol fer constar que proposa suprimir les modalitats lingüístiques de l'article 14. La presidenta adverteix que aquest tema així com tots els altres estan tancats i l'objectiu de la comissió en la sessió d'avui es estrictament abordar aspectes tècnics.

El Sr. Pons, davant algunes de les incidències exposades pel Sr. Roselló, en el sentit que determinats acords rellevants de la Comissió no es reflecteixen de manera directa, clara o immediata en l'articulat del text refós provisional, proposa realitzar un "guió" explicatiu. El Sr. Roselló, en aquest sentit, suggereix incorporar més precisions explicatives en forma de notes a peu de pàgina i fins i tot adaptar puntualment el text articulat. La qual cosa s'accepta.

En un altre ordre de coses el Director general de Projectes i Coordinació Departamental, Sr. José Antonio Roselló, presenta una comunicació anomenada "Posibles enfocques sobre la reforma del Sistema de Financiación Autonòmica en el contexto de la Reforma del estatuto de Autonomía". Aquesta comunicació no és objecte de debat doncs expressament la Comissió va decidir en el seu moment no tractar en profunditat el tema del finançament a l'espera del debat multilateral a nivell de l'Estat. Per tan el document només té la finalitat de donar als membres de la comissió una visió panoràmica de les opcions que eventualment estan obertes al voltant de l'important qüestió del finançament de l'autonomia posat en relació amb tres aspectes: el futur debat multilateral dins el conjunt espanyol, la situació particular de les Illes Balears i la qüestió sobre



**Govern
de les Illes Balears**

Vicepresidència i Conselleria
de Relacions Institucionals
Direcció General de Projectes
i Coordinació departamental

l'abast del finançament en el context de les reformes dels Estatuts d'Autonomia. En aquest sentit, el document figurarà entre els documents tècnics de suport de la comissió i s'enviarà al Parlament amb la resta de documentació

No havent-hi més temes a tractar, la presidenta dóna per acabada la sessió i convoca els assistents per a la propera, prevista per al dia 11 de gener del 2006, a on s'analitzarà de bell nou el document del text refós, la tasca del qual s'encomana a la Direcció General de Projectes. La presidenta anuncia que el pròxim mes de gener tindrà lloc un acte de presentació pública de les conclusions de la comissió i a on serà repartida l'edició definitiva del text refós i del document complementari de vots particulars. En aquest sentit l'esmentada reunió del dia 11 tindrà també un caràcter preparatori i de validació definitiva dels texts.

La presidenta aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Vistiplau
La presidenta

Acta de la reunió de la Comissió Assessora per a la Reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears

Sessió número 38

Dia: 11/01/06

Hora: de les 12:00 a les 14:30 h

Lloc: Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals

Assistents:

Sra. Maria Rosa Estarás Ferragut, presidenta de la Comissió

Sra. Felisa Vidal Mercadal, vicepresidenta de la Comissió

Sr. Avel·lí Blasco Esteve, vocal

Sr. Rafael Gil Mendoza, vocal

Sr. Francisco Tutzó Bennássar, vocal

Sr. Román Piña Homs, vocal

Sr. Joan Font Servera, vocal

Sr. Alfonso Ripoll Escandell, vocal

Sra. Pilar Ferrer Vanrell, vocal

Sr. Bartomeu Colom Pastor, vocal

Sr. Ignasi Ribas Garau, vocal

Sr. Fèlix Pons Irazazábal, vocal

Sr. Maximilià Morales Gómez, vocal

Sr. José Antonio Roselló Rausell, vocal i òrgan de suport

Sr. Felio José Bauzá Martorell, secretari de la Comissió.

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Nova revisió tècnica del text refós de la proposta de reforma de l'Estatut d'autonomia
3. Revisió tècnica del document complementari de vots particulars
4. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

A l'hora convinguda s'inicia la sessió amb la benvinguda de la presidenta, qui proposa la lectura de l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.

El Señor José Antonio Roselló Rausell explica a los vocales de la Comisión los dos documentos relativos a la “ Propuesta de Reforma de L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears” y a los Votos particulares.

Respecto del primero, expone que se han corregido los puntos identificados en el texto anterior, a saber:

- Se ha dado nueva redacción al artículo 7, a propuesta de la Sra Pilar Ferrer.
- Se ha introducido una especificación al artículo 51, en los términos propuestos por el Señor Ignasi Ribas.
- Se ha corregido el artículo 55.4 en materia de justicia gratuita, según lo señalado por el Señor Joan Font.
- Se ha introducido notas a pie de página explicativas de los acuerdos adoptados.
- Asimismo , a sugerencia de los Señores Pons y Colom, se ha indicado a pie de página los artículos que han sido objeto de voto particular.
- A propuesta del Sr. Colom, se ha cambiado la rúbrica del Título I por el de Título Preliminar.
- Se indica en nota al pie de página la organización del artículo 58. Bis en capítulos.

A continuación el Sr. José Antonio Roselló Rausell explica a los vocales que el artículo 30.6 se redacta inspirándose en el artículo 115 de la Constitución Española, y que obliga a modificar el artículo 30.5, así como el artículo 19.2 y 20.2.

Igualmente comenta que el artículo 13 había sido derogado por resultar innecesario al convertirse en una repetición de los artículos 147.3 y 148 de la Constitución Española.

En el tema de intervenciones la Sra. Pilar Ferrer propone modificar en el artículo 7 la expresión “ de acuerdo con “ por la expresión “ y”.

El Señor Joan Font sugiere que la relación de vocales de la Comisión siga un orden alfabético.

El Señor Felix Pons sugiere dar una nueva redacción al Artículo 9.4 en el sentido de” principios que inspira el modelo...”.
Recomienda que se elimine el adjetivo “ española “ de la Constitución en el artículo 10.21, que se sustituya el adjetivo “ executiu” por el sustantivo “ execució” en el artículo 49.1 y somete a reflexión a los vocales la expresión “ cap del plenari” del artículo 38.bis.

El Sr. Bartomeu Colom propone que en la nota a pie del artículo 58.bis se haga especial mención expresa de este precepto como tal.

En el artículo 38.1.3 y en la Disposición Adicional 4ª se considera incluir en una nota al pie la revisión a la nota 14.

No havent-hi més temes a tractar, la presidenta dóna per acabada la sessió i convoca els assistents per a la propera, prevista per al dia 26 de gener del 2006.

La presidenta aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Vistiplau
La presidenta